

Título: Reflexiones sobre el desarrollo colombiano: entre la cooperación externa y los desafíos locales.

Autor: Juan Sebastian Torres Franco
Universidad de Valladolid

Tutor: Jorge R. García Arias

Departamento de Economía

Universidad de León

Curso 2021-22

Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo



Contenido

| | |
|--|----|
| I. Introducción | 4 |
| a) Objetivos | 6 |
| b) Justificación..... | 7 |
| c) Metodología..... | 8 |
| II. Marco Teórico | 10 |
| a) Concepto de Desarrollo..... | 10 |
| b) Enfoque neoinstitucional | 14 |
| c) Desarrollo, Gobernanza, Gobernabilidad y Globalización | 16 |
| d) Corrupción y desigualdad..... | 20 |
| III. El caso colombiano | 22 |
| a) ¿Cuál es el modelo de desarrollo colombiano? | 22 |
| b) Geografía y su influencia en el desarrollo colombiano | 25 |
| c) Colombia y la Cooperación Internacional al Desarrollo..... | 28 |
| d) La cooperación y los planes de desarrollo en Colombia desde 1950 | 30 |
| e) Distribución de la desigualdad y AOD | 33 |
| Conclusiones | 51 |
| IV. Bibliografía | 54 |
| VI. Anexos | 60 |
| A.1. Índice de Pobreza Multidimensional..... | 60 |
| A.2. Producto Interno Bruto departamental..... | 61 |
| A.3 . Producto Interno Bruto per cápita por departamento..... | 62 |
| A.4. Aporte Departamental al PIB nacional..... | 63 |
| A.5. Ayuda Oficial al desarrollo en miles de millones USD por departamento 2011-2021.... | 64 |
| A.6. Distribución de la población según censo de 2018..... | 65 |
| A.7. Etiqueta de gráficos por Departamento..... | 67 |

Índice de Gráficos

| | |
|---|----|
| Gráfico 1. Crecimiento del PIB respecto a la región. Crisis de 1982, 1998, 2008, y COVID | 25 |
| Gráfico 2. Distribución promedio de la participación en el PIB nacional | 27 |
| Gráfico 3. Distribución AOD por departamento entre 2010-2022. Cifras en miles de millones de USD precios actuales. | 40 |
| Gráfico 4. Relación AOD departamento-IMP. Año 2018 | 41 |
| Gráfico 5. Relación AOD departamento-IMP. Año 2019 | 41 |
| Gráfico 6. Relación AOD departamento-IMP. Año 2020 | 42 |
| Gráfico 7. Relación AOD departamento-IMP. Año 2021 | 42 |
| Gráfico 8. Relación PIB departamento-IMP. Año 2018 | 45 |
| Gráfico 9. Relación PIB departamento-IMP. Año 2019 | 46 |
| Gráfico 10. Relación PIB departamento-IMP. Año 2020 | 46 |
| Gráfico 11. Relación proporción poblacional por departamento-IMP. Año 2018. | 47 |

Índice de Ilustraciones

| | |
|--|----|
| Ilustración 1. Mapa del Conflicto. Presencia de FARC, ELN, BACRIM-GAO, hasta el año 2015. 24 | |
| Ilustración 2. Mapa de Carreteras principales a 2022 | 26 |
| Ilustración 3. Distribución del índice de Pobreza Multidimensional por municipios | 36 |
| Ilustración 4. Distribución de la densidad poblacional por departamento. | 37 |

Índice de Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Reglas de buena conducta para estimular el crecimiento económico | 17 |
| Tabla 2. Dimensiones y Variables IMP del DANE (2022) | 34 |

Resumen

Este trabajo tiene como propósito presentar una discusión conceptual manifiesta en la actualidad respecto al desarrollo desde distintas visiones teóricas. En consiguiente, la construcción de este texto se ha guiado a partir de una investigación teórica respecto al desarrollo, y aplicación desde la cooperación internacional para el desarrollo. La metodología es teórica se enfocó en análisis de artículos académicos, investigación e informes publicados respecto al desarrollo, los cuales son herramientas para encausar el análisis del caso colombiano. Las fuentes de datos consultadas son cifras oficiales del estado colombiano y de entidades multilaterales como el Banco Mundial, mismas organizaciones que los textos consultados han hecho uso para previas investigaciones. El trabajo no espera redefinir el desarrollo, ni dar respuesta a los problemas de desigualdad en Colombia que limitan su desarrollo, solo es una aproximación para estudiar este caso.

Abstract

The purpose of this paper is to present a conceptual discussion that is currently manifest regarding development from different theoretical perspectives. Consequently, the construction of this text has been guided by theoretical research regarding development, and application from international cooperation for development. The methodology is theoretical, focused on the analysis of academic articles, research and published reports regarding development, which are tools to guide the analysis of the Colombian case. The data sources consulted are official figures from the Colombian state and from multilateral entities such as the World Bank, the same organizations that the consulted texts have used for previous investigations. The work does not expect to redefine development, nor to respond to the problems of inequality in Colombia that limit its development, it is only an approximation to study this case.

Palabras Claves:

Desarrollo, Instituciones, Estado, Desigualdad, Cooperación Internacional, Demografía, Geografía, y Conflicto

Keywords

Development, Institutions, State, Inequality, International Cooperation, Demography, Geography, and Conflict

I. Introducción

Este trabajo se ha propuesto a partir de la necesidad de indagar acerca de la definición conceptual del Desarrollo y su dualidad con fenómenos como lo es la desigualdad, particularmente en caso colombiano. El documento tiene impreso un énfasis a valorar el desarrollo como una herramienta para influir sobre otros Estados. A lo largo de la historia, las sociedades se han construido bajo sistemas de poder jerárquico tanto al interior de las comunidades como en las relaciones entre distintas comunidades.

Cuando se desafía el orden construido o bien, cuando algunos de los agentes quieren ascender en la jerarquía del poder, este suele asimilar e intentar implementar mejores estrategias que las sociedades dominantes. Es bajo esta dinámica que las antiguas colonias, intentan asimilar los modelos de gobiernos preestablecidos y buscan relacionarse con sociedades que están a la vanguardia del sistema internacional. Este proyecto de asimilación de sociedad donde se adaptaba los modelos políticos y económicos en Latinoamérica fue el objetivo de las elites de gobiernos, puesto que tenían los recursos para conocer otras realidades externas (Morales, 2018). Los procesos de industrialización y la creación de metarrelatos sobre el progreso, significaron la transformación del discurso político que se enmarcaba en alcanzar la modernidad, modernizar la nación (Escobar, 2012).

La postguerra y la polarización del mundo trajo consigo la adaptación del concepto de modernidad al de desarrollo. Ayudar a los países en fortalecer sus niveles de desarrollo, fue la herramienta de los principales modelos políticos durante el siglo XX, para ejercer influencia y establecer el nuevo sistema de alianzas y relaciones internacionales de los Estados, (Keohane & Nye, 1999) lo llamaría un sistema de interdependencia.

No obstante, las academia y teóricos no demoraron en comprender que el desarrollo es un proceso donde no solo interviene factores económicos y del mercado. El desarrollo es un proceso multidimensional, donde factores geográficos, políticos, económicos, sociales y ambientales congruente para alcanzar ritmos de progreso o mantener en rezago en un mundo dinámico y competitivo.

La teoría neoinstitucional inicio como respuesta a la explicación incompleta del desarrollo desde la perspectiva de los postulados de la economía neoclásica. Algunos autores neoinstitucionalistas como Acemoglu y Robinson, (2012) defienden que el carácter de las instituciones de estados es determinante para generar progreso o rezado en las sociedades. Puesto que las instituciones como lo ha dicho North (1990), regular el

comportamiento de los agentes y la forman como interactúan, lo que genera efectos en el comportamiento del mercado, y el gobierno encargado de administrar los recursos del Estado. Por otro lado, Alonso y Garcimartín, (2011) reconocen el papel de las instituciones, pero añaden el valor agregado de la cooperación internacional para fortalecer la calidad de instituciones y la eficiencia de los estados receptores de ayuda, de tal modo que la sociedad se ve beneficiada por el progreso alcanzada.

El proceso de globalización representa un escenario donde los estados deben jugar con la asimetría del poder del sistema mundo. Los distintos actores poseen capacidades de acción distintas, y la desaparición de las barreras antes desconocidas a causa del progreso tecnológico ha llevado a un mundo mayor interconectado en poco tiempo, donde la brecha entre países aumenta significativamente. En este escenario, cuando países se enfrentan a la necesidad de acceder a recursos de entidades multilaterales o la misma cooperación, es posible que se enfrente a dilemas como el presentado por Rodrik (2011) con su trilema. De igual manera, estos gobiernos que buscan ayuda se encuentran con condiciones de acceso, que suponen modificar elementos institucionales y da vía libre a problemas de gobernanza y gobernabilidad dentro de su gobierno.

Sin embargo, aceptar el concepto del desarrollo también es admitir la consecuencia implícita que los estados presentan ritmos de crecimiento sociales y económicos dispares entre si. El sistema mundo es dominado por quienes construyen el concepto del desarrollo para mantener el *status quo*. Autores latinoamericanos como Quijano (1999), Gudynas (2011) y Escobar (2018), han discutido esto a través de conceptos críticos al desarrollo como la decolonilidad del poder, donde el interés principal es defender el empoderamiento de las comunidades latinoamericanas en establecer sus propios modelos de desarrollo, en la búsqueda de disminuir las relaciones de dependencia.

Las distintas visiones del desarrollo son divergentes, pero con un punto común, el progreso de las comunidades. El texto profundiza esta discusión teórica y construye casi de manera cronológica las propuestas presentadas anteriormente, puesto que se adentra al estudio del caso de estudio centrado en Colombia. Se ha escogido este país, puesto que es una de tantas anomalías en el mundo. Colombia es una nación donde las estimación de crecimiento económico son las mejores desde hace unos años, incluso su recuperación postpandemia es comparativamente mejor que al de sus semejantes en la región; pero al mismo tiempo, sus resultados de desigualdad no son los mejores, incluso son los mas altos de Latinoamérica.

El trabajo no pretende proponer una nueva definición del Desarrollo, busca que el lector reviva la discusión y tenga presente las dos visiones, aquellas propuestas desde sociedades desarrolladas desde el llamado Norte, y la visión que se construye con las alternativas del Sur.

De igual manera, el caso colombiano es solo un análisis de las multiplicidad de factores presentes en el estado que limitado la implementación de los procesos desarrollistas, a la misma vez que han supuesto elementos que garantizan la presencia de la desigualdad en su territorio (Kalmanovitz Krauter et al., 2017; Ocampo, 2019; Yaffe, 2011). Colombia es una nación dividida por la geografía, construido a partir de comunidades aisladas que han aportado una riqueza cultural digna de cualquier país, pero que ha enfrentado un conflicto interno desde los primeros años de vida republicana, razón por la cual el establecimiento de instituciones eficientes y presentes en cada rincón del territorio aún se encuentra en construcción, lo que se constituye retos actuales para el fortalecimiento del estado y compromisos adquiridos con la sociedad a partir de la firma del último Acuerdo de Paz (2016) con la guerrilla de las FARC-EP.

a) Objetivos

Objetivo General

Construir una disertación teórica que sirva como herramienta para analizar el proceso de construcción del desarrollo colombiano y los factores endógenos que han limitado la obtención de este

Objetivos Específicos

- Presentar una discusión teórica respecto al concepto del Desarrollo y su influencia en la formación de asimetrías entre la relación de los estados
- Establecer una disertación del concepto de desarrollo como una constante discursiva en la construcción del Estado respecto al bienestar de sus habitantes, en este caso el colombiano.
- Identificar factores estructurales y demográficos que han propiciado la presencia de la desigualdad en Colombia a pesar de los procesos de desarrollo

b) Justificación

El trabajo presentado plantea una discusión teórica respecto al concepto de desarrollo y su acercamiento al caso colombiano. Durante la formación académica, el desarrollo se ha entendido como una meta a la que las comunidades aspiran llegar. El desarrollo ha resultado en una suerte de garantizar la influencia sobre otras naciones, una herramienta de poder, y un objetivo constante los países en vía de desarrollo. Lo que se ha encontrado a lo largo de la investigación es una construcción y apropiación de la idea del desarrollo como herramienta para perpetuar la dominación (en algún sentido simbólica) y consensuada entre los estados con mayores capacidades respecto a quienes no lo tienen.

En esta discusión, el desarrollo como objetivo no parece ser el objeto de discusión, la discusión se centra en la influencia de las visiones del desarrollo, puesto que se puede distinguir al desarrollo de mercado, humano, militar, entre otros. De igual manera, pareciera que las recomendaciones y estrategias para alcanzar el desarrollo, solo son viables si son formuladas de ciertos espectros ideológicos. En este sentido, el neoinstitucionalismo ha articulado el desarrollo como el producto de la eficiencia de las instituciones y la interacción de los agentes que la componen, los cuales pueden ser influenciado por factores exógenos como la ubicación geográfica, el conflicto o la globalización(Alonso & Garcimartín, 2011; Esteban & Pastó, 2011). Por otro lado, las visiones alternativas del desarrollo han permitido establecer una mirada crítica al desarrollo convencional caracterizado por la dominación y explotación entre las naciones, hace un llamado a la construcción de modelos a partir de las comunidades marginadas como lo son las visiones indigenistas de América Latina, los cuales han tomado importancia en la región actualmente(Gudynas, 2016; Quijano, 1999).

Lo anterior sumado a los conocimientos adquiridos en el máster de cooperación internacional para el desarrollo han fortalecido la necesidad de comprender la desigualdad en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Este escenario es de especial interés puesto que no existe una explicación plena de la presencia de desigualdad. En su defecto, se han realizado estudios que estudian la desigualdad como el producto de la violencia, corrupción, dependencia a ciertas actividades de explotación, e incluso como el resultado del fracaso de Estado. No obstante, se entiende que la investigación no alcanzara a explicar la desigualdad, ni proponer un modelo de desarrollo que disminuya este fenómeno para el caso de estudio. En suma, se plantea una discusión que intenta acercarse a una forma donde se vinculen los factores determinantes que se identifican.

c) Metodología

El trabajo tiene un carácter teórico, puesto que investiga construcción conceptual del desarrollo y genera una discusión a partir de la producción académica a disposición. La investigación idéntico elementos claves para analizar el desarrollo en los países, y en el caso de estudio, Colombia.

Por tal motivo, se presentan dos secciones que corresponde a temporalidades distintas y que tienen variaciones metodológicas. La primera sección es teórica, presenta una discusión del concepto, los aportes de la perspectiva neoinstitucionalista en el estudio del desarrollo, las implicaciones de los procesos de globalización en temas de gobernanza y gobernabilidad para los estados, y por último el papel de la corrupción como elemento que interviene en la desigualdad y limita el desarrollo. En este proceso la metodología fue teórica, se limitó a revisión de literatura y construcción de la disertación.

El segundo momento hace referencia al uso de la disertación en el estudio del caso colombiano. A cuestión que es un caso de estudio en el cual se recurrió a comparación de cifras, la metodología es un tanto mixta, puesto que combina la investigación en bases de datos oficiales de entidades multilaterales, organizaciones y estadísticas nacionales.

La investigación sugirió la relación empírica de factores que intervienen en la implementación de procesos que impulsen el desarrollo colombiano, o bien que lo han limitado. En este sentido, se recurrieron a herramientas estadísticas para comprobar el grado de relación entre los factores, consideradas variables. En tal razón, para probar si existía un grado de asociación de la mano de procesos estadístico como la correlación de Pearson que mide el vínculo de entre dos variables, no obstante, se enfatiza en partir del hecho que una correlación no implica una causalidad. Se probó la asociación entre los indicadores:

Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM) -Flujo de AOD, con el objeto de medir si la distribución de la AOD estaba directamente vinculada con los indicadores de pobreza y desigualdad, el cual es una condicionante en el acceso de recursos de cooperación internacional.

Indicador Pobreza Multidimensional (IPM) – PIB departamental, para los años 2018-2020. Varios autores que se señalan en el marco teórico han estudiado la asociación del crecimiento económico con la disparidad de desarrollo entre los países. En este caso se quiso probar si el vínculo también estaba presente a nivel interno, puesto que existe una

disparidad en términos de ingreso, producción y concentración de la población en el territorio colombiano, más concretamente los departamentos.

Es de recalcar que la actual metodología para medir la pobreza multidimensional es una reproducción del método usado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHDI), el cual se realiza desde el año 2018. De igual manera, el cálculo de cifras definitivas de la participación departamental al PIB nacional y sus variantes posee, sin embargo, el indicador de PIB departamental solo posee para el último año una estimación y no se ha publicado el valor definitivo, por tal se optó en tomar los datos hasta el año 2020. En cuanto la información de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la fuente de datos es el portal de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), que centraliza la información y los recursos de cooperación con los distintos agentes.

II. Marco Teórico

En esta sección se pretende realizar una discusión de los conceptos presentes en este trabajo y estudiados previamente por distinto autores. A lo largo de la investigación y la formación profesional tanto como el máster se ha identificado factores determinantes en el desarrollo, siendo este concepto el de mayor valor a estudiar por ser el objetivo para alcanzar por los estados y sus gobiernos, el anhelo del desarrollo.

Posteriormente se estudia desde la teoría neoinstitucional y su relación con la idea del desarrollo. Dado que el neoinstitucionalismo se origina como propuesta crítica a los vacíos de la teoría neoclásica económica, busca explicar los factores estructurales y endógenos centrados en las instituciones como elementos determinantes del desarrollo.

Esta sección se centra en presentar la discusión teórica del concepto del desarrollo, su uso discursivo, el vínculo en los procesos de construcción del Estado, la relación con la cooperación internacional, y los procesos de globalización en un mundo con avances tecnológicos acelerados que crece en interconexión. En esta medida, se presentan algunos retos que están inmersos en las dinámicas de la cooperación al desarrollo para la superación de la pobreza y desigualdad, como lo es la gobernabilidad, gobernanza, corrupción, entre otros.

a) Concepto de Desarrollo

El desarrollo implica pensar que existe una asimetría o desigualdad de capacidades entre los estados, las cuales pueden ser superadas con mayor o menor esfuerzo según sea el caso del contexto de la sociedad. De Sousa Santos (2014), identifica que el concepto del desarrollo es el producto de una visión hegemónica, puesto que la herramienta discursiva para legitimar la dominación indirecta de los estados comparativamente más productivos, sobre aquellos que están rezagados y dentro de su área de influencia.

El concepto es multidimensional, Escobar (2018), lo propone bajo la idea de un concepto adjetivado. La razón subyace en que el desarrollo siempre está acompañado de un elemento que lo caracteriza, se habla de desarrollo económico, social, militar, tecnológico entre otros. En la disposición que la dimensión sea valorada y obtenga mejores rendimientos frente a otros agentes, entonces se expresa que es más desarrollado según sea el caso (Escobar, 2018).

Lo anterior supone que existe una relación entre desarrollo, modernidad y hegemonía. Al seguir la lógica presentada por Morales (2019), el desarrollo es la

transformación de la persecución del sueño de la modernidad, la cual era buscada por las elites (hegemonía) de las naciones latinoamericanas. No obstante, asumir el desarrollo es aceptar que existen relaciones de desigualdad entre las distintas sociedades, puesto que esto justifica que existen potencias hegemónicas que imponen sobre naciones, las mismas que aceptan el sistema jerárquico de la comunidad internacional. Esto representa una relación con la colonialidad del poder que se traduce en la medida que la emulación del modelo de sociedad más “avanzada” es asemejada por otra sociedad que no posee las mismas características y por tanto se ve influenciada por su modelo a seguir.

Illich (1992), en su obra discute acerca como el desarrollo ha sido una constante desde la edad clásica, la significancia que una sociedad era más desarrollada o civilizada suponía un patrón jerárquico frente a sus homologas, por tanto, se convertía una herramienta de poder frente a los demás. Por otro lado, el concepto de desarrollo suele estar asociado a la modernidad y a los meta-relatos que se construyen a su alrededor. En este sentido, Quijano (2000), supone que la colonialidad del poder establece un patrón estructural en la modernidad, esto se traduce en un sistema de dominación en el entramado de las relaciones sociales, este caso las sociedades con distintos grados de avance lo que se refleja en el discurso del desarrollo y el interés de los estados (que se suponen civilizados) de reproducir los sistemas de producción y modelos de gobiernos en sus orbitas de influencias (capitalismo/economía planifica y modelos de democracia liberal en contraposición al área de influencia de la antigua URSS). En consecuencia, se configura un sistema jerárquico de la población mundial y por ende una dinámica de explotación.

El evolucionismo social ha propuesto una aproximación conceptual al desarrollo, como el proceso en el cual las sociedades progresivamente estimulan cambios que refieran progreso y escalen en la estructura jerárquica del sistema, donde se alcancen mejores condiciones comparativas respecto a sus semejantes. Algunos de los elementos que están presentes son las competencias en el perfeccionamiento de capacidades tecnológicas, productivas, militares y sociales. La competencia entre los individuos y los grupos que integran genera lo que se conoce como potencia social y dinámicas de jerarquización entre las interacciones de los sujetos(Said, 2004; Williams, 1977).

La hegemonía y competencia entre los modelos de sociedad crea un patrón de convergencia, puesto que de esta manera se asegura la estructura a la cual los distintos agentes del sistema. En este sentido, aceptar el concepto del desarrollo es convenir la existencia de una asimetría en la sociedad, donde las disparidades de progreso general relaciones de sometimiento o dependencia a través de la orden mundial (Di Pasquo et al., 2018)

En los últimos años ha cobrado fuerza los modelos alternativos de desarrollo, los cuales están representados por las visiones del “Sumak Kawsay” y “Suma Qamaña”, ambos se traducen en Buen Vivir, el primero en quechua y el último en aymara. Esta visión está plasmada en las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), las cuales son representación de una victoria frente a los discursos habitualmente hegemónicos del desarrollo que está presente en la mayoría de los países latinoamericanos. El resultado es un reconocimiento de la multiculturalidad presente en el continente y una suerte de victoria para las comunidades que han sido históricamente marginadas, puesto que lo indígena y ancestral suele ser visto como atrasado.

Quijano (2000) hace alusión a la des/colonialidad del poder como forma alternativa del desarrollo convencional, el cual está asociada al sistema de explotación de recursos y del capital humano. Su propuesta se resume en el empoderamiento desde la población del gobierno, es decir, en la democracia activa de los ciudadanos. En su obra alude al indigenismo del sur global, puesto que han sido los marginados en la construcción del Estado-nación y su empoderamiento representaría la des/colonialidad del poder ostentado por las ideas del norte global (EE. UU y Europa) lo que llevaría a la práctica las visiones del “Buen Vivir” (Quijano, 2000). Sin embargo, en su obra no parece tener en cuenta el factor demográfico de los países latinoamericanos, en este sentido refiero que la des/colonialidad del poder supone una ruptura con lo convencional y una disputa para quienes no se identifican con la cosmovisión de las culturas indígenas lo que podría generar en conflictos sociales donde la población indígena representa una mínima proporción de la ciudadanía.

Acosta (2009: 6) entiende estos eventos como: “una oportunidad de construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo”, dado que es el resultado de décadas de discusión y lucha por los derechos de las comunidades entre quienes han sufrido el empobrecimiento de las políticas asociadas al neoliberalismo lideradas por las elites de los respectivos Estados. De esta manera, Escobar (2010) calificó los movimientos defensores de esta visión como postdesarrollistas, postneoliberales y decoloniales.

La visión del Buen Vivir se podría definir como una propuesta alternativa de los movimientos indigenistas latinoamericanos que suele estar asociado al llamado socialismo del siglo XXI (Escobar, 2018). El concepto hace referencia a estrategias y prácticas que lleven a una vida digna no solo del individuo, sino de las comunidades con el planeta, lo que supone la ruptura a la acumulación de recursos y su disfrute como sinónimo de desarrollo desde las prácticas del capitalista. Dado que la construcción de este modo de vida está

relacionada a la cosmovisión de cada pueblo, no existe una definición propia, puesto que varía según las prácticas de cada comunidad.

Cuando se trabaja desde el concepto del desarrollo desde lo social y la desigualdad, normalmente se suele recurrir a los indicadores de pobreza multidimensional, desarrollo humano y desigualdad. Estos suelen ser propensos al riesgo de no ser diferenciadores respecto a las condiciones del territorio, similar a lo que pasa con el PIB per cápita. Para el caso colombiano, se evidencia que las regiones donde se ubican las ciudades principales gozan buenos rendimientos en los indicadores, comparativamente superior a territorios con menor número de ciudadanos, lo que expresa desigualdad en el desarrollo interno del país.

Rosentein-Rodan expresa que el objetivo de la cooperación internacional es influir positivamente en el desarrollo económico de los países en vía de desarrollo, de tal manera que obtengan resultados que les permitiera alcanzar el auto sostenimiento (Rosentein-Roldan, 1961). Por tal razón, los recursos de ayuda internacional como: prestamos, donaciones y asistencia técnica; tienen como meta proveer de herramientas y capacidades a los países para aumentar sus márgenes de crecimiento.

En contraposición Ridell (2007), alude que las ayudas al ser soluciones para corto plazo y no estar destinadas a trabajar los problemas estructurales, se pueden considerar recursos perdidos, puesto que no están direccionados a los puntos clave que limitan el desarrollo de los estados. No obstante, pone en manifiesto que la AOD no debe intervenir directamente en el funcionamiento de los estados, en este sentido se justifica a la condicionalidad de la ayuda en la medida que los receptores de ayuda para garantizar el acceso de recursos implementen medidas que solucionen los problemas estructurales que tienen presente.

Otro aspecto presente en la discusión de la AOD ha sido su direccionamiento. En este orden de ideas, Collier y Dollar (2001), y Ocampo (2015) han sido enfáticos en que los recursos deben ser focalizados a los contextos donde existe niveles considerables de pobreza complementado con políticas implementadas desde el estado (Collier & Dollar, 2001; Ocampo, 2015). Bajo esta dinámica, en los últimos años se experimentó un giro de recursos de AOD que estaban enfocados a la lucha contra el narcotráfico hacia las políticas de implementación del acuerdo de paz y actualmente, respecto al contexto de pandemia.

b) Enfoque neoinstitucional

Las teorías económicas clásicas (en particular la neoclásica) suelen desestimar la influencia que ejercen ciertos aspectos que se encuentran fuera de las dinámicas del mercado, sobre todo los relacionados con valores éticos y morales, los comportamientos individuales y sociales. En la medida que la teoría identificó los factores económicos y añadió los elementos que condicionan la interacción de los agentes para tomar decisiones, reconocieron el papel de las instituciones en el tratamiento de los fallos del mercado; el neoinstitucionalismo invita a una redefinición de las funciones entre la relación Estado y mercado en la búsqueda de alternativas para el desarrollo (León, 2002).

Como respuesta a este vacío, las instituciones y su carácter regulador del comportamiento e interacción de los agentes intentan dar respuesta al problema. Así, se reconoce la relevancia de las instituciones formales (normas de carácter legal) e informales (costumbres, percepciones, etc.), dentro del funcionamiento del Estado y la economía como factor del desarrollo.

El neoinstitucionalismo se enfoca en el estudio de las instituciones, a las que refiere como espacios donde los agentes desenvuelven sus prácticas en la sociedad. Esta teoría resulta pertinente para comprender qué se entiende por instituciones y cómo interfieren en la economía. Adicionalmente, la literatura de discusión académica que se presenta a continuación demuestra que este enfoque teórico influyó en gran medida la necesidad de medir las instituciones y otorgarle un valor en el estudio del desarrollo económico y social. Entre los autores que abordan esta teoría se encuentra North (1990), quien propuso a las instituciones como: “las reglas del juego en una Sociedad, o más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana”. Estas reglas de juego condicionan a los individuos y estructuran sus incentivos en las diferentes dimensiones: política, social y económica. Por tanto, la forma que se estructuran y/o caracteriza las instituciones es un determinante del comportamiento económico de una sociedad.

Las instituciones se catalogan como formales e informales, y ambas categorías son producto de la acción humana. Se entiende como formales a todas aquellas que se crean, mantienen y modifican por medio de decisiones políticas; pueden ser de carácter: jurídico (constituciones y leyes), organizaciones (administración, justicia, asociaciones), o expresarse por medio de contratos y acuerdos. Por su parte, aquellas instituciones informales se refieren a la conducta del agente, sus costumbres, tradiciones y códigos, los cuales pueden variar al grado de cumplimiento según los disponga la sociedad. Por tal

motivo, el comportamiento del ser humano y sus diversas formas de asociación están sometidos a las instituciones, las reglas de juego en la sociedad.

Este enfoque teórico estudia las instituciones, sus procesos evolutivos en la historia y la forma como moldea el comportamiento de los agentes en la medida que estos igualmente cambian (North, 1993). Dado que las instituciones definen el comportamiento de los agentes, son entonces parte de los elementos determinantes en los procesos de desarrollo, puesto que esto codifican la estructura que garantizan el progreso en sus aspectos multidimensionales y mejoran las condiciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas de una sociedad.

En su primera etapa, la propuesta institucional realizó críticas a la teoría neoclásica de la economía, puesto se centró en el análisis económico desde un punto de vista individualista, y su propuesta sobre el equilibrio general del mercado no reconocía elementos endógenos e históricos que podrían influir en el desarrollo económico (Villareal, 2000). Por su parte Castiglioni (1999), expone que el defecto de las primeras ideas del institucionalismo fue centrarse en las estructuras institucionales formales de los Estados, apartándose del análisis de institucionales producto de la interacción humana (normas sociales, valores, costumbres), los cuales, aunque no son instituciones formales (es decir, instituciones informales), poseen un carácter regulador y moldean el comportamiento de los agentes en la medida que se transforman a través del tiempo.

En consecuencia, las instituciones pueden identificarse desde las organizaciones (públicas o privadas) que influyen, generan y administran las políticas y programas entre los agentes. Asimismo, existe una distinción entre las instituciones y las organizaciones; es decir, las primeras suelen entenderse como un conjunto de normas y reglas, mientras que la segunda con los lugares donde los agentes interactúan y agrupan según sus intereses (Jones, 1983). De tal modo, la teoría se constituye en dos niveles: un primer nivel donde se enfoca en el análisis del conjunto de las reglas (legal, social, económico) que estructuran el comportamiento y permiten la producción e intercambio de bienes y servicios; y un segundo nivel donde están los arreglos institucionales o acuerdos entre los grupos de la sociedad para fomentar el cambio institucional por medio de cooperación mutua y alcanzar sus intereses (Lahera, 1996).

Straface & Page (2008), y Ziegler (2011), se centraron estudiar en cómo el desarrollo humano está influenciado por el carácter las instituciones políticas, y la democracia se convierte en una de las herramientas para alcanzar los niveles de desarrollo. Los análisis, aunque no determinan la existencia de una causalidad entre instituciones y desarrollo, si

dejan abiertas las posibilidades de existir una relación asociativa entre desarrollo humano, calidad institucional y economía en la mayoría de los Estado

Amartya Sen y Manfred Max Neef han acercado la teoría de la elección racional (TER) al análisis institucional para la comprensión del desarrollo en términos sociales, mientras tanto desde Latinoamérica, la Comisión Económica Para América Latina “CEPAL”, desde la segunda mitad del siglo XX ha vinculado el papel de las instituciones en los trabajos del estructuralismo y la dependencia, especialmente en los factores endógenos de la sociedad respecto a la búsqueda del desarrollo (Quintero, 2020).

La visión del desarrollo de Sen se asocia a las condiciones y calidad de vida de la población, el cual está directamente relacionada con la capacidad de los Estados de garantizar la provisión de las políticas y bienes públicos necesarios para el pleno desarrollo de las personas y su inserción en la sociedad, lo que deja en las instituciones un papel determinante. Por su parte la CEPAL en los años 80, estimulo el estudio del progreso social/desarrollo en los países latinoamericanos a partir de la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y el papel del Estado en garantizar las políticas para que la población alcanzara mejores resultados en este ámbito. En Colombia, autores como Kalmanovitz, Bejarano y Machado han estudiado el papel de instituciones y la relación con el desarrollo agropecuario especialmente, mientras que Rubio y Wiesner se han enfocado en la relación neo-institucionalismo con la formulación, implementación y eficiencia de las políticas públicas (Bejarano, 1998; Kalmanovitz Krauter, 2005).

Por otro lado, la teoría neoinstitucional ha considerado los factores geográficos y espaciales como elementos determinantes en desarrollo de las instituciones y el comportamiento de los individuos. Moncayo (2003: 33) explica el papel de la nueva geografía económica, en el cual se tiene en cuenta la localización, distancia entre las costas, centros de consumo, costo de transporte, calidad de suelos, clima, disponibilidad de recursos naturales, entre otros. Bajo esta mirada, existe una congruencia con lo dicho por Veltz (1999, 18): “los territorios/geografía no son campos de maniobras, sino actores”, puesto que el carácter de la población se moldea por el territorio e influye en los beneficios que esta produce.

c) Desarrollo, Gobernanza, Gobernabilidad y Globalización

La globalización trae consigo problemas de gobernabilidad y gobernanza dentro de los estados. Cuando los países en desarrollo buscan acceder a planes de cooperación y

programas de financiación para el desarrollo, las entidades como el Banco Mundial (BM) condiciona el acceso a partir de recomendaciones de reestructuración que podrían representar problemas de gobernanza y gobernabilidad al interior de los gobiernos.

Entre los años 1980-1990, con el auspicio de las políticas del Reaganismo y Thatcherismo se permitió el auspicio del llamado “Consenso de Washington”, el cual estuvo enfocado en economías en desarrollo principalmente (Veltmeyer, 2011). Aunque bien, este consenso no existió de manea formal, diversos autores como Rodrik, (2011) lo identifican como una serie de recomendaciones surgidas desde instituciones cuyo centro se ubica en Washington D.C., especialmente desde el BM donde se impulsaron políticas bajo la idea de estimular conceptos como Gobernabilidad y aumento del crecimiento económico, los cuales reflejaban mayores índices de desarrollo.

En este periodo de tiempo, los procesos de globalización tomaron mayor fuerza a raíz de la rápida evolución de los medios de comunicación y el resultado de procesos multidimensionales: políticos, tecnológicos y sociales. Rodrik (2007, citar) argumenta que este proceso permitió aumentar el tránsito de capitales, con el cual se daría paso a procesos de “financiarización” del desarrollo, lo exigió cambios en las instituciones reguladoras para controlar el tránsito de información y responder a las políticas de transparencia del llamado “Consenso”. Este término es el nombre acuñado John Williamson en 1989, para identificar el paquete de reformas y recomendaciones formuladas hacia los países en desarrollo durante la crisis financiera de la deuda. Estas recomendaciones fueron dictadas por agencias establecidas en Washington, y se resumen en reformas neoliberales, donde el objetivo era estimular la liberalización de la economía. La siguiente tabla presenta el resumen de las comendaciones

Tabla 1. Reglas de buena conducta para estimular el crecimiento economico.

| Consenso de Washington original | Consenso de Washington ampliado (elementos agregados a los 10 originales) |
|---|--|
| 1. Disciplina Fiscal | 11. Gobernanza corporativa |
| 2. Reorientación del gasto publico | 12. Combate a la corrupción |
| 3. Reforma fiscal | 13. Mercados laborales flexibles |
| 4. Liberalización de las tasas de interés | 14. Observancia de los preceptos de la OMC |
| 5. Tipos de cambio unificados y competitivos | 15. Observancia de los códigos y estándares financieros internacionales |
| 6. Liberalización comercial | 16. Apertura “prudente” de las cuentas de capital |
| 7. Apertura a la inversión extranjera directa | 17. Regímenes cambiarios no intermedios |
| 8. Privatización | 18. Bancos centrales independientes/metas |
| 9. Desregularización | |

10. Garantía de los derechos de propiedad

inflacionarias

19. Redes de seguridad social

20. Metas de reducción de la pobreza

Tomado de: Rodrik (2011: 36)

Los procesos de globalización identificados por Keohane y Nye (1999) como un entramado de institucionales que demandan información constantemente. La globalización trajo consigo una reducción del aislacionismo, donde los países se encuentran inmersos en relaciones de interdependencia. Precisamente este enfoque permite analizar como las economías están conectadas, y en qué forma los resultados de los indicadores las afectan lo que implica la necesidad de estimular reformas que mejoren la calidad institucional. Para el caso colombiano, los procesos de globalización han implicado consigo la aceptación del modelo hegemónico de desarrollo según la propuesta neoliberal la cual resulto el camino único a seguir con la disolución de la Unión Soviética. En este sentido, la mayoría de las economías en desarrollo, y en este caso el de Colombia se abrieron paso a procesos de apertura económica durante los años noventa.

Los procesos asociados a la globalización incorporaron en el discurso que el desarrollo está íntimamente vinculado a una gobernanza y gobernabilidad que incluya las instituciones, y en este orden de ideas que garantice su calidad institucional. La globalización es un fenómeno multidimensional que implica que algo está en crecimiento. Según Keohane y Nye (1999), este fenómeno es el resultado del crecimiento de la red de interdependencia, cuyo fin es conectar y permitir el flujo de capitales, bienes/servicios, información, ideas y personas.

Acemoglu & Robinson (2012) y Rodrik (2011), consideran como factor influyente en los cambios institucionales el proceso de globalización. La razón subyace en la búsqueda de la aceptación y apoyo internacional de los gobiernos, lo cuales se verán obligados en mejorar la calidad de las instituciones en busca de financiación para garantizar estabilidad económica.

La globalización y los proyectos de inserción al sistema internacional propiciaron que cada uno de los países se viera en la obligación de cumplir los estándares que la comunidad internacional demande. Desde principios de la década de los noventa, ideas de autores neoinstitucionalistas apoyados por las premisas de la teoría del crecimiento endógeno, enfocaron la visión de organismos internacionales como la ONU y BM para estructurar planes de cooperación e incluso permear la visión con los países en como planear su desarrollo.

Kaufman, Kraay y Zordon-Lobaton (2000), entienden la gobernabilidad como: “el conjunto de tradiciones e instituciones que determina cómo ejerce la autoridad en un país”, los cuales comprenden dimensiones de: 1) procesos de selección, supervisión y sustitución de gobiernos; 2) Capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz, y elaborar/ejecutar las políticas para sus ejecución y desarrollo del país; y 3) Respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado de las instituciones que rigen las relaciones económicas y sociales

Kauffman et al. (1999) y Rodrik (2007), expresan que la globalización es uno de los principales problemas que enfrenta la gobernabilidad (especialmente de las economías en desarrollo). La globalización implica un riesgo a las instituciones, ya que pueden verse sometidas a una presión externa que buscan asemejar modelos instituciones de otras regiones. Esta presión y carencia de autonomía institucional por cumplir estándares, dificulta la tarea de las instituciones para realizar el seguimiento y control contra problemas de corrupción, puesto que los Estados se centran en realizar las reformas a las instituciones, pero no en fortalecerlas durante el proceso.

La gobernanza y gobernabilidad son conceptos que empiezan a estar presentes en la discusión de la eficiencia institucional y su relación con desarrollo. La gobernanza significa coordinación de los factores, instituciones, y actores que buscan proveer bienes públicos; implica una arquitectura del sistema que permite el desarrollo. Por su parte la gobernabilidad se asocia a la relación entre el Estado, sector público y población. La cooperación para el desarrollo, la implementación de recomendaciones de agentes multilaterales y de gobiernos externos para el acceso a créditos, suele estar acompañado de una reestructuración internas en los Estados en desarrollo, lo que representa conflictos internos respecto a la soberanía institucional y la injerencia extranjera.

Para Ocampo (2015), la globalización y las instituciones se unen bajo la idea de una gobernanza encabezada por instituciones transnacionales y la cooperación internacional, gobernanza global. La globalización implica una disminución de fronteras físicas y digitales, lo que traduce en mayor velocidad del flujo de información, personas y capitales. Por tanto, los conceptos de gobernanza y gobernabilidad no se pueden limitar al escenario local, los gobiernos actúan aislados del sistema internacional, deben coordinar y cooperar con agentes/instituciones multilaterales, por la gobernanza es global.

El problema de gobernabilidad al interior de los Estados está relacionado con la globalización y la corrupción interna. Kauffman et al. (1999) y Rodrik (2007), identifican que la globalización implica riesgos a las instituciones y por tanto al marco institucional,

principalmente de las económicas en desarrollo, lo que se traduce en un problema de gobernabilidad. El riesgo es el producto de la presión ejercida por las fuerzas externas, especialmente aquellas que representan presiones para estimular modelos de desarrollo o bien el acceso a préstamos financieros necesarios para el funcionamiento del Estado.

La gobernanza trasciende el ámbito doméstico en los últimos años se ha proyectado a la idea de una gobernanza global en donde la agenda internacional no se limita a planes de defensa. La idea una gobernanza encarna el interés de una mejor distribución de la riqueza, que permita un mejor desarrollo humano al interior de las naciones. De igual manera, está vinculada a los objetivos de cooperación y desarrollo sostenible de la agenda internacional, donde el crecimiento económico deja de ser el centro de la agenda y se convierte solo en una herramienta para mejora la calidad de vida en los estados.

La gobernanza global incluye no solo a los gobiernos de los Estados, pues los sectores civiles, agentes económicos, agencias de cooperación, instituciones públicas y privadas, lo han acogido dentro de sus objetivos. Estos elementos se ven encarnados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta visión de gobernanza no implica la construcción de un sistema internacional jerárquico y unificado, la gobernanza global, es propuesta mediante el desarrollo de instituciones transnacionales que velan por mejorar las condiciones de vida a partir de una buena administración en los gobiernos nacionales.

d) Corrupción y desigualdad

Acemoglu y Robinson, (2012), Rodrik, (2011), y Romer, (1986), han asociado los efectos de la corrupción sobre las instituciones que conforman el Estado. Identificaron entre los efectos inmediatos y corrosivos los elevados costos de transacción, pérdida de productividad económica y desviación de ganancias sociales a individuales (desigualdad social), lo que afecta negativamente la imagen de las instituciones hacia sociedad y por ende un bajo desarrollo del Estado.

La corrupción, trae consigo costos sociales y económicos. Las actividades depredadoras disminuyen el bienestar social, representado en bienes públicos para el goce de la sociedad y claro está en el desempeño económico. Mayores grados de corrupción debilitan la eficacia de las instituciones estatales (Acemoglu & Robinson, 2012). Es decir, la disminución de confianza por parte de los agentes hacia las múltiples entidades, lo que se ve reflejado en las calificaciones negativas por parte de los indicadores; de igual manera, al existir corrupción los costos de transacción son mayores (Rodrik, 2007), los rendimientos económicos decrecen, lo cual desacelera la economía y el desarrollo de las naciones.

Rodrik (1996), arguye que la ayuda o cooperación internacional puede generar efectos positivos o negativos según sea el caso, puesto que la ayuda condiciona el comportamiento de las instituciones del Estado, lo que se traduce en una alteración de su establecimiento. No obstante, existe una percepción de positiva en la mayoría de los casos de impacto, puesto que la ayuda al suponer una transferencia de capital financiero, técnico, tecnológico, entre otras, también supone una búsqueda por la eficiencia. En consecuencia, se esperaría que mejore la calidad institucional del aparato estatal al interior de los países.

En este sentido, los Estados suelen estar propensos en caer en una “trampa de la ayuda” o bien hacer uso eficiente de los recursos recibidos, en este último caso, los países para garantizar el mantenimiento de los recursos desarrollan una disciplina de rendición de cuentas respecto a los donantes, de tal manera que se garantice el mantenimiento de flujo de ayuda. Un problema que enfrentan al desarrollar una dependencia de la ayuda según (es la desincentivación del desarrollo de un sistema fiscal solio en los países receptores Kimbrough, 1986; Brautigam y Knack, 2004).

Adicionalmente, en los países considerados economías en desarrollo el fenómeno de corrupción resulta más costoso en términos sociales (Perry et al., 2018). La corrupción genera costes políticos, económicos y sociales; puesto que la presencia de este comportamiento significa una pérdida de recursos que pueden ser usados de mejor manera. Por otro lado, la alta incidencia de corrupción es una antesala de antecedentes negativos en las llamadas calificaciones soberanas y de riesgo país, lo que representa menos probabilidad de atraer la inversión extranjera directa (IED)(Panizza, 2017).

Actualmente para Colombia existe un aumento negativo en las mediciones de corrupción resultado de los indicadores, como lo es el índice de percepción de corrupción donde obtiene 39 (escala de 0-100, entre más alto menor percepción de corrupción). La calidad del marco institucional no es eficiente, reflejado en el indicador de Control de Corrupción (Banco Mundial, 2022). En su defecto la desigualdad suele estar vinculada a la persistencia de corrupción y la carencia de un marco institucional fuerte que evite el riesgo de estas prácticas (Perry & Saavedra, 2018). La efectividad de las instituciones y regulaciones es decadente a causa de la corrupción por lo que se mantiene desequilibrio en el sistema y en consecuencia las políticas cuyo objeto era el desarrollo y el crecimiento económico, no fueran efectivos en términos de desarrollo, pero si en crecimiento económico.

Por consiguiente la confianza en las instituciones y el sistema judicial es uno de los menores en la OCDE, ubicando en un 37% su confianza ciudadana (OCDE, 2022). Colombia no cuenta con protección al denunciante de casos de corrupción, cuyo fenómeno está

presente en el sector público y la contratación de obras de infraestructura, esto traduce en menores estímulos para realizar denuncias contra los eventos de corrupción. El resultado es la disminución de la eficiencia y descontento social hacia el gobierno, puesto que no ven resultados en el direccionamiento del recaudo fiscal.

La habitual tendencia a relacionar el desarrollo con el comportamiento de indicadores asociados al PIB de un país genera un sesgo, puesto que solo se observando el crecimiento económico. Esto presenta un sesgo reduccionista: este tipo de indicadores no explora la desigualdad de la población y sus niveles de desarrollo humano.

En el caso latinoamericano, es común encontrar que altos niveles de desigualdad en el ingreso o bien los indicadores de desarrollo humano, un agravante de esto puede tomarse las cuestiones culturales de las comunidades autóctonas. Las cuales suelen tener una visión de desarrollo arraigada a sus propias cosmovisiones, pero a la vez no cuentan con las mismas preocupaciones de la visión occidental donde primaria niveles de ingreso altos y provisión de los servicios. En el caso colombiano, por ejemplo, es complicado, puesto que gozan de una autonomía en la administración de sus recursos y proyectos, por tanto, aunque existan proyectos que busque mejorar las situaciones en las que se encuentran son las mismas comunidades y sus líderes de quienes depende que se mejoren las condiciones en las que viven.

III. El caso colombiano

a) ¿Cuál es el modelo de desarrollo colombiano?

El estado colombiano carece de un modelo propio de desarrollo. En su lugar, se podría decir que el desarrollo colombiano ha estado marcado por el conflicto interno y el deseo de modernización de las elites y la inserción al mercado internacional.

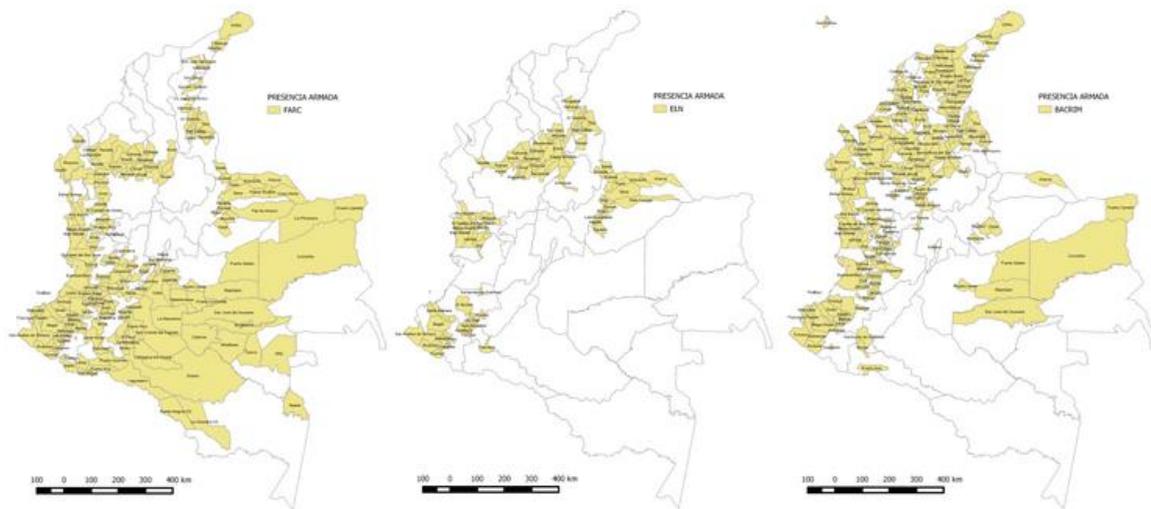
Es posible distinguir factores estructurales que han condicionado el desarrollo del país. En primer lugar, la sociedad colombiana asimiló la estructura colonial en el proceso de construcción del Estado, esto conllevó a conservar los asentamiento e instituciones hispánicas que existían previamente (Safford & Palacios, 2011). Durante buena parte del siglo XIX, el desarrollo se estableció en las rutas de comercio fluviales que conectaban de la costa norte (caribe) al centro, pasando de una economía de explotación aurífera hasta el establecimiento del café como producto de exportación a finales del siglo (Kalmanovitz Krauter et al., 2017).

La institucionalización del café como producto estuvo intervenida por inestabilidad política y fenómenos de colonización nacional similar a lo ocurrido en el oeste estadounidense, puesto que estas poblaciones buscaron aumentar los límites de sus localidades en la medida que se adentraban en la exploración de minas de oro (Ocampo, 1982, 2019). Sin embargo, lo que ocurrió está ligada a una distribución de la tierra en territorios deshabitados que estimulo el campo colombiano entre los años 1870-1910, etapa en la cual coincide con la fundación de nuevos centros urbanos en la zona cafetera y la región del Amazonas colombiano (Sanclemente Téllez, 2010).

Durante el siglo XX, el Estado se caracterizó por mantener un corte proteccionista y de aislamiento del mercado internacional (Melo, 1982; Ocampo, 2019). En la primera mitad de esta época, las elites regionales establecieron centros de industria que se volvieron polos de desarrollo a causa de aislamiento entre las principales ciudades. La economía respondía a un consumo local y las exportaciones seguían lideradas por bienes primarios como el café y banano. Se resalta la constitución de sectores industriales como el textil, licores y azúcar; la geografía se convierte en una limitante del crecimiento nacional que impide la conexión ferroviaria y aumenta los costos de producción y transporte de bienes.

Por otro lado, el conflicto interno actual inició paralelo a la postguerra, específicamente en 1948, esta persistencia de la violencia es un factor persistente como limitante en el desarrollo colombiano (León, 2017; Londoño Díaz & Prado Mejía, 2021). Las vías de comunicación limitadas entre las regiones y la violencia en las zonas rurales genero olas de desplazamiento hacia las ciudades principales.

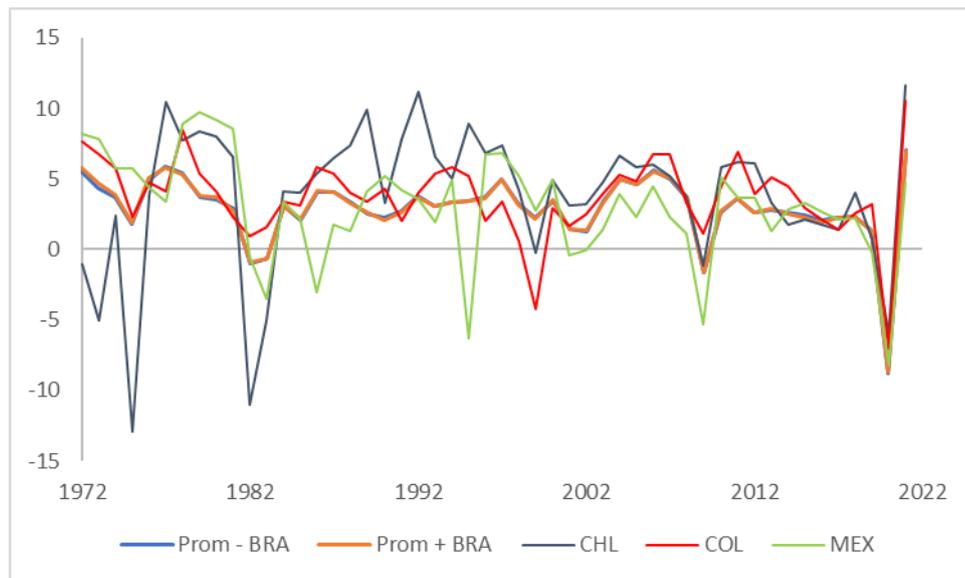
Este un elemento diferenciador de los otros países latinoamericanos, donde el crecimiento se concentra en una o dos ciudades, en el caso colombiano se distinguen alrededor de cinco, las cuales están ubicadas por regiones y actualmente son los principales focos de atracción de capital extranjero. En la ilustración 1, se muestra la distribución del conflicto hasta el 2015, para la actualidad las áreas donde hacia presencia las FARC experimentan un reordenamiento de la influencia entre los demás actores y disidencia de la extinta guerrilla.

Ilustración 1. Mapa del Conflicto. Presencia de FARC, ELN, BACRIM-GAO, hasta el año 2015.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. Los mapas del Conflicto

Durante la posguerra, los países latinoamericanos se vieron afectados por el aumento de precios en los diferentes tipos de insumos. Bajo esta dinámica, se inclinaron a acoger una serie de recomendaciones donde se fortalecía el proteccionismo a partir un modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) o cepalino, esto se traducía en el desarrollo de una industria y mercado nacional que reemplaza los bienes de importación. Este fenómeno fue similar en los países del sudeste asiático, los cuales tuvieron mejores resultados. Esta disparidad del desarrollo generó nuevos enfoques para estudiar el desarrollo como lo son el estructuralismo y la teoría de interdependencia que tienen raíces en latinoamericanas, especialmente asociadas a la CEPAL.

Ante el aumento de préstamos a recursos financieros de organismos de cooperación y entidades multilaterales que además de introducir reformas estructurales para desarrollar el modelo de la CEPAL, buscaban implementar programas sociales nacionales. Este crecimiento en el acceso a préstamos desencadenaría la crisis de la deuda en los países de la región a lo largo de la década de los 80. Sin embargo, el letargo del estado colombiano en estimular políticas que implementaran el modelo cepalino, sumado al flujo de capital a producto del narcotráfico y en la lucha contra las drogas permitió que Colombia no se viera afectada y tuviera ritmos de crecimiento estables (Rocha García, 2014). En el Gráfico 1, se observa el comportamiento del crecimiento económico respecto a otros países en la región. La particularidad del caso colombiano se manifiesta en el impacto que generan las crisis, donde comúnmente su incidencia es menor, exceptuando la crisis de 1998.

Gráfico 1. Crecimiento del PIB respecto a la región. Crisis de 1982, 1998, 2008, y COVID

Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (Banco Mundial, 2022). Elaboración propia

La crisis colombiana de la década de los 90, estuvo influenciada por la implementación de políticas neoliberales y la llamada apertura económica posterior a la constitución de 1991. La presión internacional, especialmente de los agentes asociados al Consenso de Washington y el interés interno para dar apertura del mercado no fueron acompañados de políticas que protegieran la industria nacional no preparada para la competencia internacional. En consecuencia, la década del 90 representó un fracaso político de las políticas neoliberales que vieron su peor momento en la crisis financiera de 1998, la cual estaba influenciada por factores exógenos como lo fueron la crisis económica de Rusia - Brasil, y endógenos como el aumento de la deuda pública-privada, incremento de tasas de interés, sobreoferta monetaria y crisis hipotecaria.

b) Geografía y su influencia en el desarrollo colombiano

Colombia es un país dividido, geográfico, social y políticamente. La marcada geografía se ha encargado de separar la población y mantener ritmos de desarrollos distintos entre sí, de igual manera, esta distinción es observable en la idiosincrasia regional y la multiplicidad del lenguaje que los diferencia (Galvis-Aponte et al., 2021). No obstante, este fenómeno el cual trae inmediatamente el imaginario a una sociedad castellanizada, también se encargó de aislar a las poblaciones autóctonas que han logrado proteger su patrimonio cultural en el devenir del tiempo y a los cuales la constitución de 1991 les otorga garantías y derechos que fueron innovación en su momento (Sandoval Robayo, 2017).

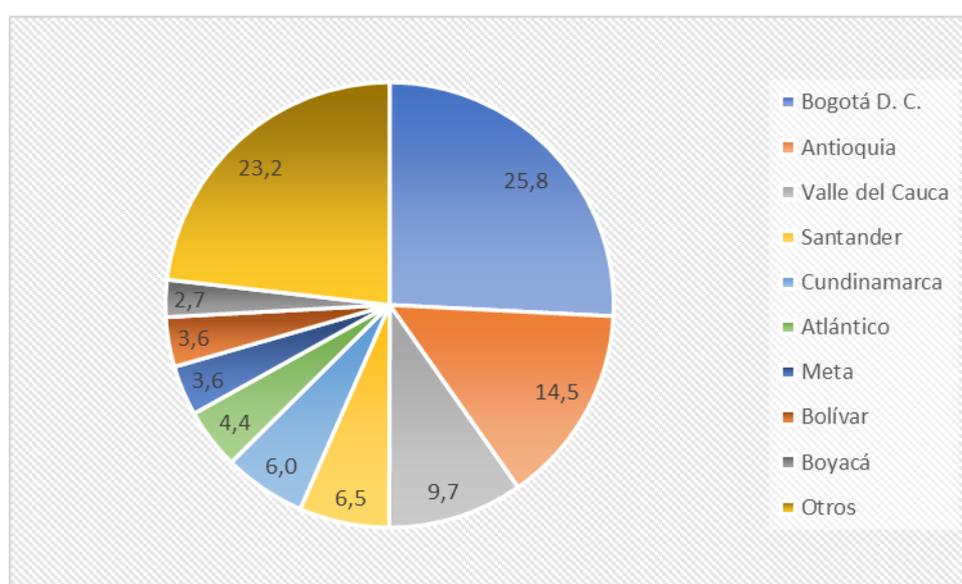
La división geográfica del territorio y el aislamiento de las comunidades han sido factores que diversos autores han sugerido como determinantes de la desigualdad en

Colombia y el distinto flujo de migraciones dio como resultados desigualdades en el desarrollo.

Como se mencionó en el marco teórico, el ideal del desarrollo desplazó la promesa de modernidad planteada por los diversos gobiernos en buena parte del siglo XX. No obstante, el desarrollo se plantea de manera desigual desde sus inicios. Para el caso colombiano, en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), los cuales varían según el gobierno, se concentraba la inversión en las zonas de interés político y no siempre en las zonas con demanda desde social. Por otro lado, también existe el interés desde sectores de la cooperación internacional de estimular el desarrollo, pero en este sentido, se traduce en una preocupación por imitar los modelos de sociedades ejemplares para las elites gobernantes y las comunidades mayoritarias del Estado.

Actualmente, la desigualdad y pobreza están presentes en las comunidades aisladas dentro del territorio nacional (región pacífica, amazonia y Orinoquia). En dichas regiones paradójicamente su economía se sustenta en la explotación minero-energética, sin embargo, los sectores de explotación siguen estando aislados de las poblaciones lo cual no genera una relación que vincule cualquier tipo de desarrollo. Solo 8 de los 33 departamentos representan alrededor del 75% del PIB nacional, donde los departamentos o regiones económicas son: Bogotá D.C, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Meta y Boyacá.

Gráfico 2. Distribución promedio de la participación en el PIB nacional.



Fuente: Cuentas nacionales. PIB por departamento. DANE (2022)

Los indicadores de pobreza multidimensional y monetaria en estas áreas son justamente las más bajas, solo superado con departamento que históricamente han sido marginados. Estos comparten una baja concentración de la población en comparación a los departamentos ubicados en centro del país y los mismos que representan áreas de conexión del mercado. Como se ha dicho previamente, la baja concentración de la población no representa un interés para formular políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de estas zonas, puesto que el Estado muchas veces no logra ganar a causa del conflicto lo cual es costoso en términos de recursos y no hay garantías de que los proyectos sean sostenibles.

Adicionalmente, también se puede distinguir una desigualdad de la presencia del Estado. Lo que responde de manera lógica a la falta de una planeación oportuna de las poblaciones, su uso de suelos, provisión de bienes públicos y protección de los derechos consagrados en la constitución (Celis, 2017).

c) Colombia y la Cooperación Internacional al Desarrollo

Desde la década de 1950 es posible identificar los primeros esfuerzos de cooperación, cuyo antecedente inmediato se rastrea a Bretton Woods en 1944, evento en el cual se establecieron las nuevas condiciones financieras de postguerra (Mikesell, 1994). El producto más relevante es los que se denominaría Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales serán las bases de las primeras organizaciones multilaterales. El FMI estaría destinado a otorgar préstamos a estados con déficits en sus balanzas de pagos, lo cual se implicaba implementar recomendaciones del organismo en los estados. Por su parte el BIRF se interesaba en promover la industrialización de los países por medio de la financiación de proyectos de inversión pública y privada (Tassara, 2010).

Con el desarrollo de la Guerra Fría, los dos hegemónicos principales polos (EE. UU. y la URSS) identificaron en la cooperación internacional una herramienta de influencia en los países en desarrollo, estableciendo así un sistema de alianzas entre bandos capitalistas y comunistas. Harry Truman lo hace manifiesto en su discurso de posesión en 1949:

“...tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial disponible para la mejora y el crecimiento de las regiones subdesarrolladas...” (Senate Document)

Del lado soviético, su homólogo Nikita Krushchev lo expresaría así:

“...Los países en desarrollo, aunque no pertenecen al sistema mundial socialista, pueden aprovecharse de sus logros (...) necesitan no tener que mendigar a sus antiguos

opresores para lograr equipos modernos. Pueden conseguirlo en los países socialistas, libres de todo tipo de obligación política o militar... (Tassara, 2010, p.6, citando el discurso de Nikita Krushev).

De esta manera, la década empieza a ser el abrebocas de una competencia por la cooperación y alienación según sea los intereses de cooperante y el receptor. La cooperación internacional se caracterizaba por una relación jerarquía a causa de los condicionantes de ayuda desde los organismos multilaterales. Esta relación se vería un poco más evidente con el fenómeno de descolonización que se experimentó en la década 1960 en los nuevos estados de África y Asia, que progresivamente se agruparían bajo el nombre de Movimiento de países No Alineados (MPANO).

Ante la negativa los nuevos países en alinease con algunos de los bandos y de acceder a recursos de cooperación que significara pertenecer al mismo, es donde se origina los primeros ejemplos de cooperación Sur-Sur y primeras manifestaciones las alternativas al desarrollo los cuales tienen su raíz latinoamericana. Consecuentemente, aparece el término acuñado por el francés Alfred Sauvy del llamado “Tercer Mundo”, como forma de diferenciar el mundo de EE. UU, el segundo mundo de URSS y el tercero, cuyos factores económicos han sido asociados al subdesarrollo.

A partir de los años 60, los países desarrollados estructuran las oficinas de cooperación enfocadas a los países del tercer mundo, lo que se asociaría al neocolonialismo. Estas oficinas u agencias se caracterizan por un sistema de ayuda bilaterales hacia el país receptor. Con la revolución cubana (1959), para EE. UU significo un menester fortalecer sus lazos con los países de la región con el fin de evitar más países se alinearán con el contrincante ideológico, plasmándose en el programa “Alianza para el Progreso”, cuyo interés estaba representado en erradicar la pobreza desde la implementación de programas de gobierno con corte liberal en Latinoamérica para acceder a los recursos de EE. UU.

En las décadas siguientes, la brecha de desigualdad entre los países desarrollo y en vías de desarrollo aumento a causa de la disparidad presentada en las tasas de crecimiento, siendo los primeros quienes crecían a razón de 4% entre 1950 y 1970, mientras que los segundos solo alzaron un 2.7% (Tassara, 2010).

El BM impulsó el informe Pearson con el objetivo de medir los resultados de los primeros años de la cooperación internacional. Lo relevante de este informe radica en la recomendación hacia una cooperación más allá que recursos financieros, que debía implicar la transmisión de cooperación técnica donde se vinculara una comprensión y el respeto de

las partes, de igual manera que los programas deberían enfocarse a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas (Pearson, 1970). El informe significó una crítica y una reflexión de la forma como se ejecutaba la AOD, replanteándose hacia la satisfacción de Necesidad Básicas Insatisfechas.

Hacia los 80 los organismos multilaterales aumentaron el otorgamiento de préstamos para países en desarrollo, lo cual significó un aumento de la deuda pública, la cual sería causante de la crisis que lleva su nombre “Crisis de la Deuda”. La cooperación en esta época orientó a estimular políticas neoliberales al interior de los estados. Dichas políticas se enfocaron en los puntos identificados por el Consenso de Washington y que fueron acogidas por la mayoría de los países latinoamericanos.

Desde la década los 90, la cooperación internacional experimentó un giro hacia la disminución de la pobreza y sus causas, influenciado por Amartya Sen. En este sentido, el papel de investigaciones realizadas por organismos como PNUD tomó especial importancia al momento de definir los destinos de la AOD. Desde esta década la cooperación internacional experimenta también una crítica al neoliberalismo y sus políticas, centrándose en el estímulo de políticas sociales de los países en desarrollo y un enfoque participativo de la población en los proyectos de cooperación como actores activos del mismo.

El contexto internacional de la AOD en el nuevo milenio inició con la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más adelante Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objeto principal fue la erradicación de la pobreza. En 2005, se realizó la Declaración de París, con el fin de realizar una revisión periódica de los logros en los ODM. En retrospectiva las cumbres representaron cambios en la forma como se ejecutaba la cooperación puesto que vincularon nuevos agentes de la sociedad y la implementación de indicadores en el seguimiento de los ODM.

d) La cooperación y los planes de desarrollo en Colombia desde 1950

En el contexto colombiano, el gobierno en cabeza del entonces presidente Lleras Camargo (1958-1962), adoptó las recomendaciones para acceder a los fondos que brindaba el FMI y el BM, de igual manera, realizó las políticas de la Alianza para el Progreso, plasmándose así en el plan de desarrollo. El mismo plan enunciaba que era “sometido próximamente a los organismos internacionales de crédito y el comité de los nueve expertos de Washington, al BIRF y al BM” (PND, 1961). Dicho programa se enfocó en la violencia acaecida en el sector rural y se convertía en un limitante del desarrollo agrícola, fundamental para la posterior

reforma agraria de 1961, por otro lado, también tuvo como objeto la destinación del 12.3% del total del gasto público para programas educativos (Ramirez & Rodriguez, 2002)

El programa de desarrollo del gobierno Lleras Camargo, se considera la asimilación de las recomendaciones de acceso a la cooperación puesto que cumplió a cabalidad con las sugerencias de las entidades multilaterales, transformándolas en política pública y, además, estableció un “Grupo de Consulta para Colombia” el cual estaba constituido por distintas agencias de cooperación europeas y los principales organismos multilaterales. El producto se materializa en las obras de infraestructura presentes entre 1963-1968, los cuales incluso aumentaron la deuda externa de Colombia (Plan de Desarrollo DNP, 1969). Por último, el plan de desarrollo también contempló la creación del Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo, el cual respondió a las recomendaciones de la FAO mediante el Plan Mundial de Alimentos.

Durante el periodo presidencial de Lleras Restrepo (1966-1970) se evidenció una necesidad del estado de organizar los flujos de ayuda internacional, por tal se creó el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), vinculado al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según los datos del DNP de 1969, los recursos se destinaron a proyectos de servicios públicos e infraestructura vial en un 80%, el monto restante fue destinado al desarrollo regional, integración fronteriza, industria y educación (PND, 1969). En resumen, el primer plan de desarrollo apostaba por el acceso a recursos destinados al desarrollo rural, el segundo por su parte se enfocó en disminuir la desigualdad social.

Los programas implementados para combatir la desigualdad dieron un resultado positivo e incluso estimularon el empleo. Durante inicios de la década de los años 70, el gobierno implementó políticas sociales que ampliaba la proyección de derechos a la población vulnerable destinando alrededor del 50% del gasto público a programas sociales (Leiva, 2010). Respecto a los recursos de la AOD, ocurrió algo curioso, puesto que se usó gran parte en programas de reforestación (Plan de desarrollo DNP, 1974).

En cuanto a los años 80, los gobiernos no lograron establecer una hoja de ruta respecto al desarrollo de políticas a causa de la constante eventualidad ocurridas que obligaron a direccionar los recursos por emergencia como lo fueron desastres naturales y atentado (Ramirez & Rodriguez, 2002)

Por otro lado, solo hasta este momento se implementa una estrategia para medir la pobreza, la cual viene influenciada por la CEPAL, implementando el modelo de medición exitoso en Argentina de las Necesidades Básicas Insatisfechas y que posteriormente se incorporaría al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Barco en 1986 (Fresneda, 2007).

No obstante, el contexto colombiano fue distinto, los recursos de cooperación que recibía estaban enfocados en la lucha contra el narcotráfico. El comportamiento fue positivo hasta 1995 en los indicadores sociales, reflejando reducción de la pobreza, desempleo y desigualdad. Sin embargo, el escenario fue negativo hasta principios del nuevo milenio a causa de la crisis financiera e inflación de 1999 (Núñez y Ramírez, 2002).

Ante las deficiencias estructurales que no permitían centralizar la coordinación de los recursos obtenidos por cooperación hasta antes de crearse la entonces Dirección General de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya tarea fue proponer las pautas de negociación, orientación, promoción y coordinación de las entidades correspondientes a la Cooperación Internacional (Acción Social, 2008).

Los años 90 iniciaron con la implementación de un gobierno de reformas neoliberales en comparación a sus antecesores, las cuales se sustentaron en dos aspectos principales de las recomendaciones de los organismos multilaterales: apertura de la economía e inversión de la infraestructura; y mejoramiento de los servicios sociales de la población más pobre. Paradójicamente la implementación de las medidas afectó a la población más vulnerables, puesto que la competencia internacional era más barata en maquinaria y tecnología, lo que desplazó la población laboral y causó desempleo. En cuanto al segundo punto, las metas de mejora planteadas no se alcanzaron, ni tuvieron el impacto esperado en el sector educativo (Fresneda, González, Cárdenas, & Sarmiento, 1996).

El gobierno de Samper 1994-1998 a causa de los problemas del narcotráfico recibió un estado restringido en las relaciones con EE. UU, cuyo efecto se vio en una reducción del gasto en todos los programas sociales. En resumen, durante estos años se presentó un estancamiento en los recursos de AOD y su eficiencia administrativa, los cuales representaron un retroceso en la cooperación internacional.

El ámbito nacional fue distinto, puesto que la cooperación se tramitaba hacia las políticas de securitización, dando seguimiento a la lucha contra las drogas y el terrorismo. No obstante, el acceso a créditos del FMI generó reformas macroeconómicas que tenían como fin diseñar los recursos para la emergencia social. Durante el gobierno Uribe, los ODM fueron implementados en las políticas y planes de desarrollo regionales a lo largo del territorio colombiano (Social, Más y mejor cooperación internacional para Colombia, 2010).

e) Distribución de la desigualdad y AOD

La definición del concepto de pobreza en Colombia ha estado ligado a los lineamientos de la cooperación internacional y el debate de las entidades multilaterales. El DNP, la pobreza se ha relacionado a las condiciones de vida de la población puesto que están asociadas al desempeño de los diferentes sectores sociales. Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística actualmente mide la pobreza en dos dimensiones: Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional a partir de la encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente y reproduciendo la metodología empleada por Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHDI).

En términos históricos, la medición de la pobreza inició en 1984, a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos implementada en 13 ciudades principales. Una segunda oportunidad se ubicó entre 1994-95, con pequeños cambios en la metodología anterior de la encuesta que servía para medir las canastas familiares, y obedecía a los requerimientos de la Food and Agriculture Organization (FAO) (Muñoz, 2000).

Para el 2005, se realiza una nueva versión de la encuesta de Ingresos y Gastos, sin embargo, en esta ocasión se contó con el apoyo financiero del PNUD y la MERDP, los cuales ejecutaron cambios en el estudio de la pobreza e indigencia y adicionaron 10 ciudades (Muñoz y Rivas, 2005)

La última reforma está asociada al enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), las cuales vinculo el método usado por OPHDI desde 2011 desde el índice de Pobreza Multidimensional (IMP). El cual analiza el grado de privación de las personas en 5 dimensiones y 15 variables (DANE, 2022). En la Tabla 2 se presenta las áreas de análisis usadas actualmente en las mediciones anuales de Pobreza Multidimensional del DANE:

Tabla 2. Dimensiones y Variables IMP del DANE (2022)

| Dimensiones | Variables |
|--|--|
| Condiciones educativas del Hogar | 1. Logro educativo 2. Analfabetismo |
| Condiciones de la niñez y juventud | 3. Asistencia escolar 4. Rezago escolar 5. Accesos a servicios para el cuidado de primera infancia 6. Trabajo infantil |
| Trabajo | 7. Desempleo de larga duración 8. Empleo formal |
| Salud | 9. Aseguramiento en Salud 10. Acceso a servicios de salud |
| Servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda | 11. Acceso a fuentes de agua mejorada 12. Eliminación de excretas 13. Material de suelos 14. Material de paredes exteriores 15. Hacinamiento crítico |

Fuente: Metodología índice pobreza multidimensional. Gran Encuesta de Calidad de Vida (GECV, 2022)

El panorama de la pobreza y desigualdad en Colombia no es fácil, los informes de Bargain & Aminjonov (2021), BID (2020) PNUD, (2022) y OECD (2022) concluyen que, aunque es una de economías con mejor comportamiento en sus indicadores, es también la más desigual de la región. La entrada a la OCDE se tradujo en el paso de ser catalogado como país de renta media, a renta media-alta (OCDE, 2017). En este sentido, Colombia dejaba de ser un receptor de AOD exclusivo a tener la posibilidad de participar como donante, practica que ha venido implementado desde la cooperación Sur-Sur y triangular en la región.

Es necesario tener en cuenta que el país comenzó siendo receptor de AOD desde mitad del siglo pasado, al ser identificado como una nación objetivo de los planes de cooperación para el desarrollo en temas agrícolas y sociales. Posteriormente, la etapa de guerra con el narcotráfico de los años 80 hasta la llamada política de *securitización* con la empezó el nuevo milenio, el país paso a ser un socio estratégico de Estados Unidos y por consiguiente recibir flujos de ayuda crecientes en los cuales miembros de la Unión Europa estaban presentes (Tickner, 2004). Esta política de securitización estaba ligada a la lucha contra las drogas y la guerra antiterrorista la cual caracterizo el primer decenio del milenio.

Los recursos provenientes de EE. UU, en su mayoría estaban asociados a la cooperación técnica militar en los territorios con conflicto y la financiación de planes de intervención social cuyo objetivo era apartar el apoyo de la población civil hacia los grupos

armados. Entre algunos de los planes estaba la fumigación, erradicación de los cultivos de coca y la sustitución por cultivos que les pudieran generar beneficio y sustento a las comunidades anteriormente afectadas. Por otro lado, también se contaba con la ejecución de los planes de fortalecimiento institucional, a razón de la nueva presencia del Estado en áreas donde a causa del conflicto era deficiente (Calderón Rojas, 2016; Gavina Mesa et al., 2018; Arlene B; Tickner & Morales, 2015).

Bajo esta dinámica, se puede corroborar que la mayoría de la ayuda estaba relacionado con gasto militar, tecnología y salud (APC-Colombia, 2021). Sin embargo, debido a factores endógenos durante la crisis financiera del 2008 Colombia se convirtió en un centro de inversión de capitales, lo que impulsó la inversión y estimuló el desarrollo que progresivamente veía mejoría en los indicadores de desigualdad y pobreza.

Según los informes de OCDE y PNUD, los elementos que han limitado el desarrollo en Colombia son: la prevalencia de la desigualdad del ingreso a causa de la informalidad laboral y conflicto interno. En primer lugar, Colombia posee la tasa de desigualdad más alta de la región en 0.54 según índice de Gini y el IDH 0.767. La informalidad incluye alrededor del 60% de la población laboral y excluye accesos a seguridad sociales, con efectos recesivos en la productividad y representa menores ingresos tributarios para el país.

Lo anterior se relaciona con el costo de establecer empresas y formalizar contratos, pues la estructura fiscal grava mayormente a las empresas en comparación que la persona natural. Por otro lado, existe una preocupación respecto a la población vulnerable como los adultos mayores que no están en edad laboral, puesto que son propensos a no alcanzar la oportunidad de contar con pensión durante sus años de retiro. Lo que representa que no contarán con ingresos fijos y quedan en responsabilidad de familia o bien representa problemas al ser considerados una carga según la composición del núcleo familiar (Cárdenas et al., 2020).

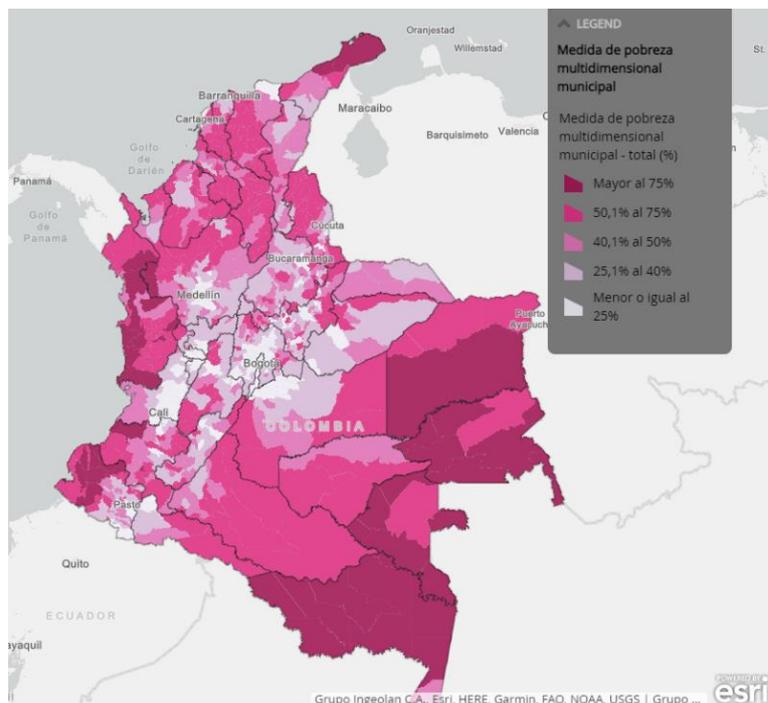
En los últimos años, la modalidad de trabajo informal y de prestación de servicios implica que no exista una obligación del contratante para pagar prestaciones sociales, esto reduce los costos de quien contrata y estimula la contratación. Sin embargo, ante una escasa cultura del contratista en asumir sus responsabilidades y cotizar pensión, el mismo resulta en situación de vulnerabilidad al término del contrato y cuando termine su vida laboral. No obstante, el no contar con un vínculo laboral formal que pague las prestaciones sociales no significa que la persona no tenga acceso a salud, puesto que Colombia cuenta con el sistema de seguridad social universal enfocado a personas en condición de vulnerabilidad. La diferenciación en la prestación del sistema de salud, diferenciado entre el servicio público y

privado, refleja automáticamente una asimetría en el acceso al servicio de salud que aquel que cuenta con el servicio nacional, lo que fomenta la desigualdad.(OCDE, 2022)

Sin embargo, los problemas de desigualdad parecen tener una relación respecto a su distribución geográfica. Las estadísticas publicadas por el DANE muestran que la calidad de vida es menor en territorios que históricamente han estado marcados por el conflicto, no obstante, también es pertinente tener en cuenta que estos territorios han estado aislados casi completamente del Estado colombiano, lo que genera ineficiencia institucional por parte de las entidades del Estado y de las administraciones locales. Las ilustraciones;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.** son tomadas directamente del informe estadístico realizado por el DANE para el año 2022.

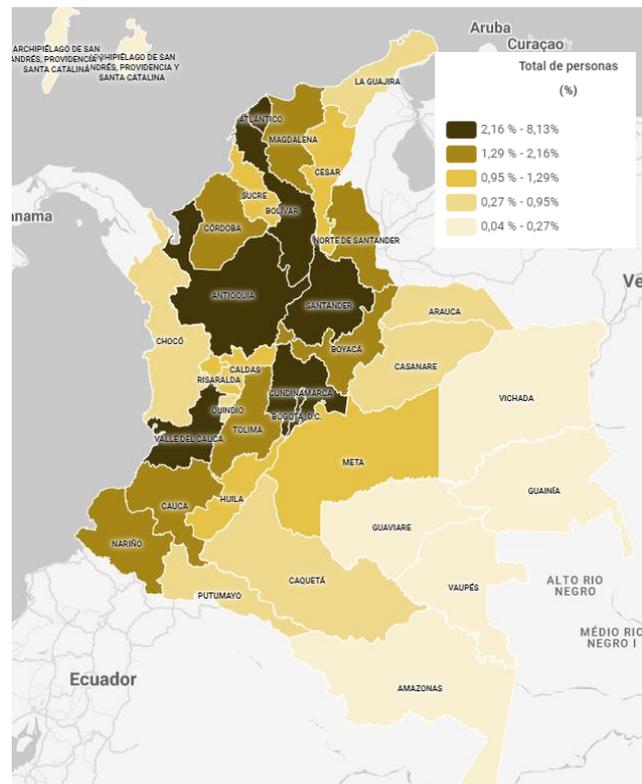
La ilustración 3 muestra la distribución de la pobreza multidimensional para el año 2021 medida por el DANE con la metodología de OPHDI, anexo 1 (A.1) muestra los resultados del último informe realizado. Este análisis se realiza anualmente a partir de la Encuesta de Calidad de Vida que se realiza en el territorio, con la que se estudia las condiciones de la población. Aunque en principio se observa una gran parte del territorio con resultados altos de pobreza multidimensional, lo cierto es que en estos territorios no se concentra la población. Al contrario, la densidad demográfica está ubicada en la población cuya IMP es menor como se muestra en la ilustración 4.

Ilustración 3. Distribución del índice de Pobreza Multidimensional por municipios.



Tomado de DANE (2022)

Ilustración 4. Distribución de la densidad poblacional por departamento.



Tomado de DANE (2022)

Cuando se compara las anteriores imágenes, se es posible identificar el patrón en cómo se distribuye la desigualdad y pobreza multidimensional en Colombia. El patrón parece vincularse a la concentración población, puesto que justo los departamentos con mayor IMP son los mismos departamentos cuya población es menos del 1% del total (ver anexo 6). De igual manera, estos territorios son los más extensos e inexplorados, considerados aun selva virgen y hacen parte del sistema amazónico. Son igualmente los que históricamente han estado marginados en la destinación de recursos, precisamente por su carencia de población y el factor de presencia de grupos armados, el cual confronta la capacidad del Estado para hacer presencia.

La firma del acuerdo de paz para la terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC-EP supuso un reto para el estado colombiano y sus habitantes. Esto se traduce en la implementación del Acuerdo de Paz y la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de los territorios marginados (Duarte et al., 2017). Por otro lado, con la desaparición del actor del conflicto, se espera un repunte en la económica, en contradicción lo que se experimenta en un reacomodo del conflicto bajo nuevos actores como los agentes disidentes de la extinta

guerrilla, el surgimiento de nuevos Grupos Armados Organizados (GAO) respecto al control de rutas del narcotráfico y las bandas criminales previamente establecidas.

Por otro lado, los territorios marginados tienen una particularidad, son también lugares de explotación de hidrocarburos y la mayoría es también considerada zonas protegidas naturales, lo que genera eventuales confrontaciones entre sectores productivos, población civil, gobierno y en algunos casos los mismos actores al margen de la ley que actúan como salvaguardas ecologistas.

Bajo esta línea, se ha percibido una distribución particular de la AOD en términos geográficos, puesto que no se ubican en territorios marginales, si no que se ubican en zonas periféricas de los centros urbanos que han sido afectados por el conflicto tanto por desplazamiento como víctimas directas de la violencia. (ver gráfico 3. distribución de AOD)

A partir de los registros de AOD departamentales y las estadísticas de pobreza multidimensional publicadas, el análisis de relación entre estas variables no arrojó un resultado concluyente. La distribución de la AOD no parece encajar con mejoras en la calidad de vida de la población. Cuando se investiga a profundidad, los recursos están destinados a territorios del centro del país donde se llevan planes de cooperación para la implementación de acuerdo de paz, zonas de interés agropecuaria, salud y educación.

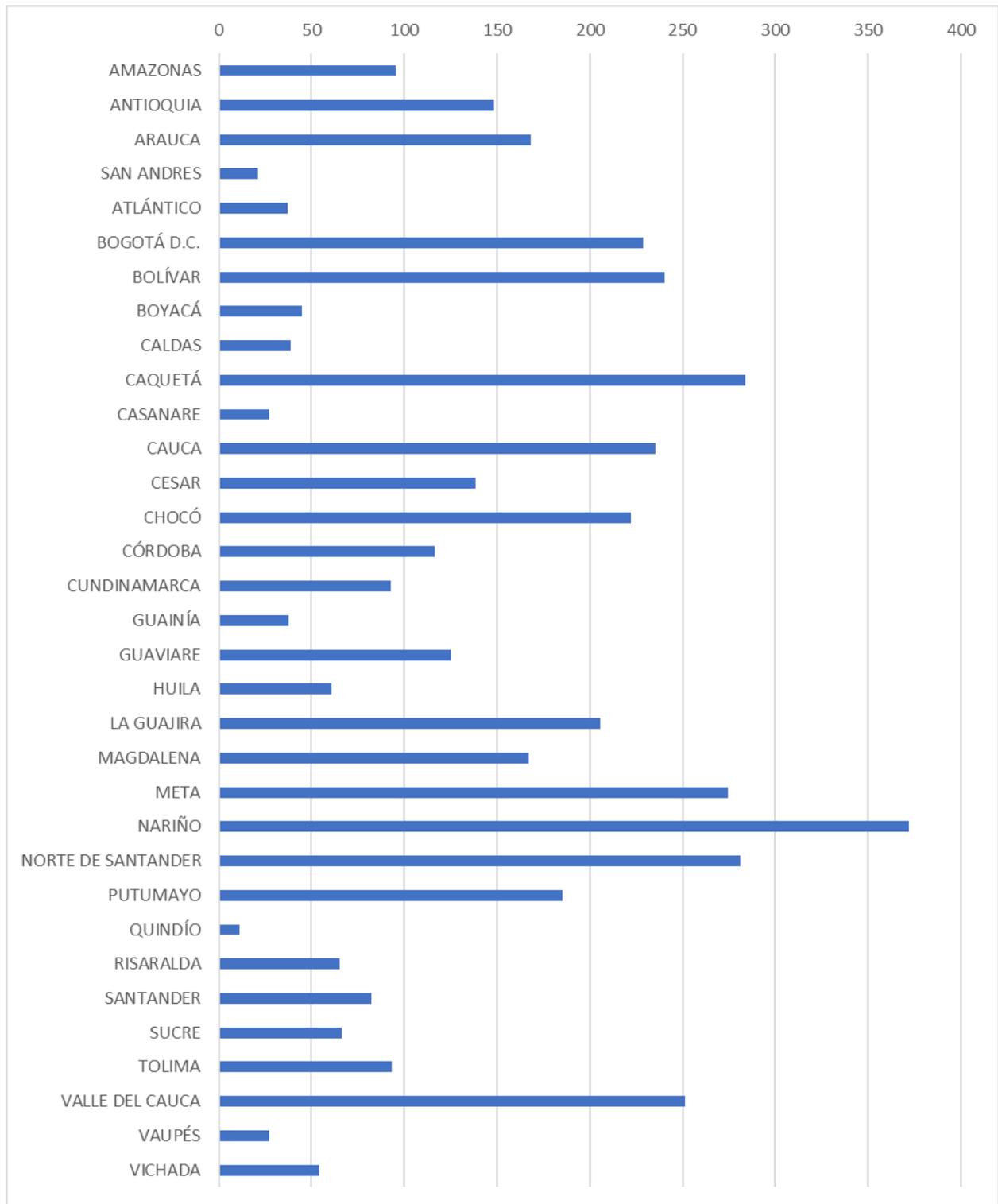
Por tal motivo, el único factor explicativo respecto a la distribución de AOD por departamento es la conexión de estos territorios como puntos de implementación del acuerdo de paz y principales receptores en algunos casos del desplazamiento. En este último aspecto, se resalta que una consecuencia directa es tendencia a sectores no planificados de los centros urbanos con deficiencia en los recursos que garanticen calidad de vida adecuada. La AOD, suele estar presente en proyectos de sanidad y vida digna según los ODS, sin embargo, se observa que no son factores determinantes y que pueden variar los destinos de los recursos según como los gobiernos regionales coordinen con los actores de la cooperación.

Los gráficos 4, 5, 6 y 7 muestran el análisis realizado entre el vínculo de los datos de las variables identificadas al momento de estudiar el patrón de distribución de la AOD en los proyectos de cooperación al interior del territorio. Como se mencionó anteriormente en la metodología, se esperaba que los departamentos con menores avances en superación de la desigualdad, o bien aquellos que han sido históricamente por el conflicto armado fueran quien recibieran mayores flujos de AOD. Sin embargo, los informes de la APC dan razón los

recursos fueron destinados incluso en departamentos con mejores resultados en sus indicadores sociales y económicos.

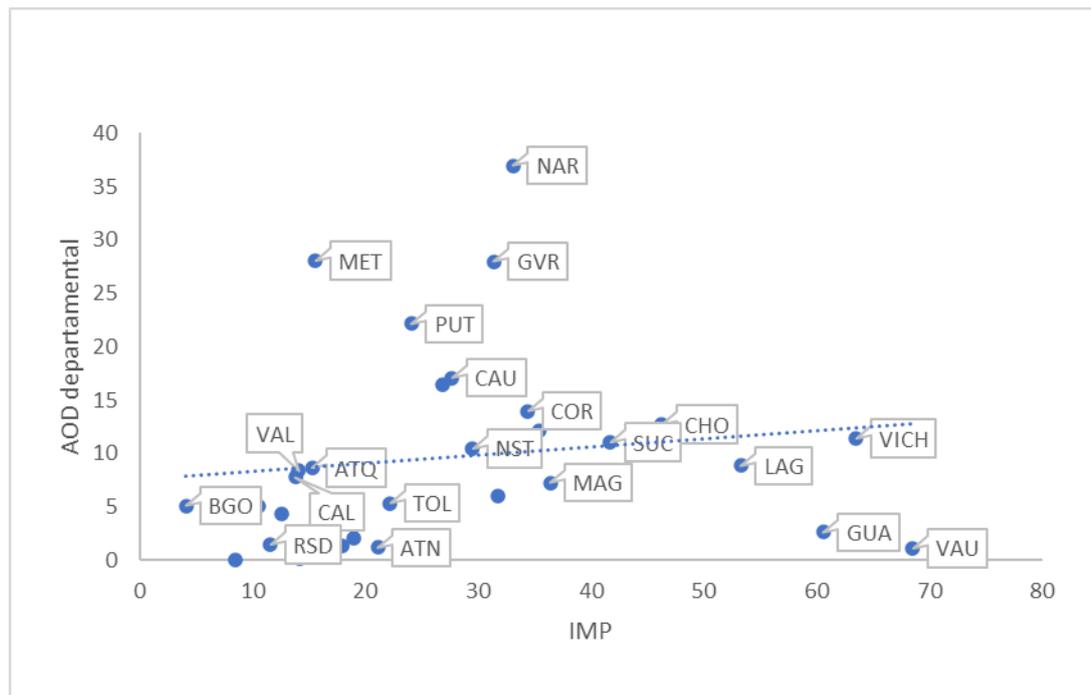
En la revisión de algunos de los informes presentes en el portal web de APC, se define que los recursos estaban destinados a fortalecimiento institucional, programas de educación, estimulación del sector agrícola y participación ciudadana. Los resultados presentados en los gráficos solo evidencian que no existe un patrón de asociación por lo menos en esta temporalidad entre la AOD y la pobreza multidimensional por departamento.

Gráfico 3. Distribución AOD por departamento entre 2010-2022. Cifras en miles de millones de USD precios actuales¹.

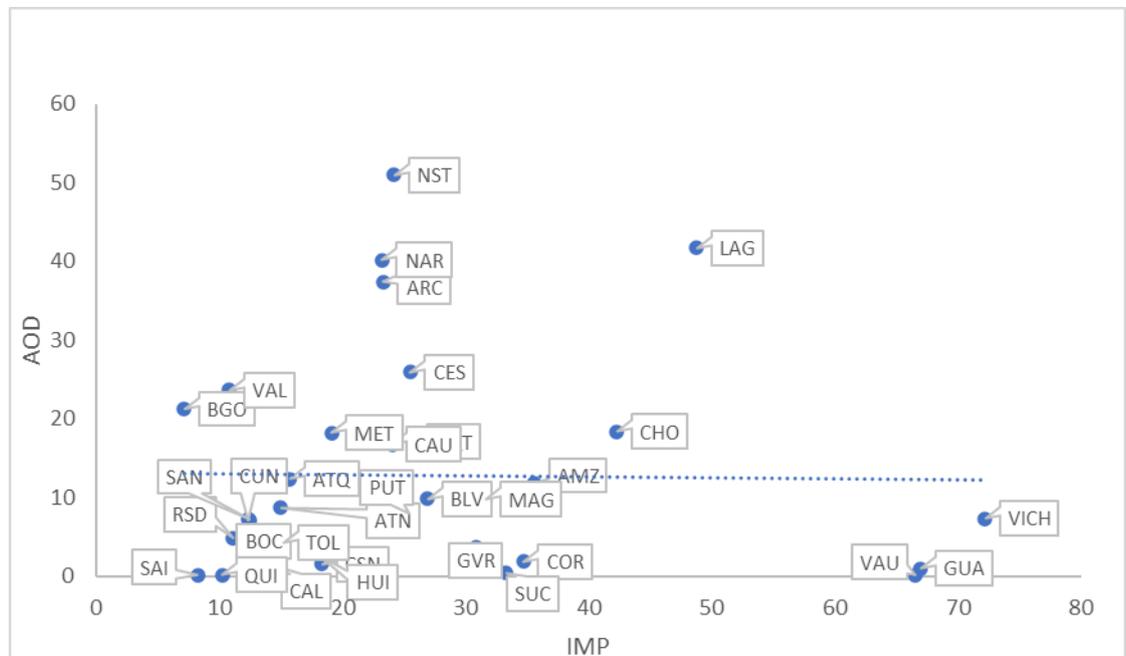


Tomado de: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (2022)

¹ En el Anexo 5 se presenta el flujo de recursos de la AOD por departamentos para los años 2010-22.

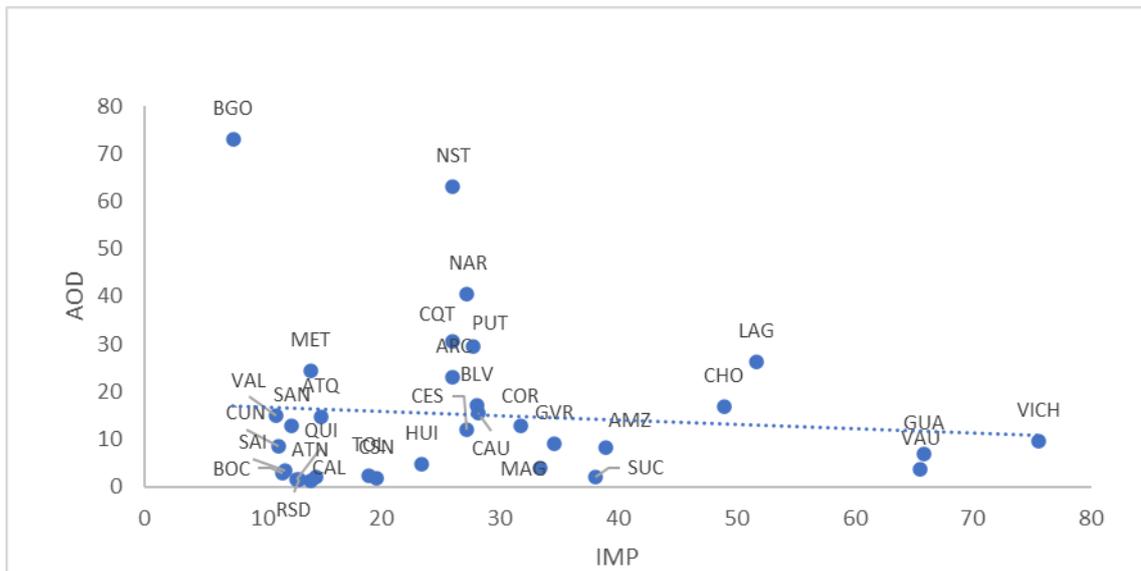
Gráfico 4. Relación AOD departamento-IMP. Año 2018

Fuente: IMP-DANE (2022) y APC (2022). Elaboración propia

Gráfico 5. Relación AOD departamento-IMP. Año 2019

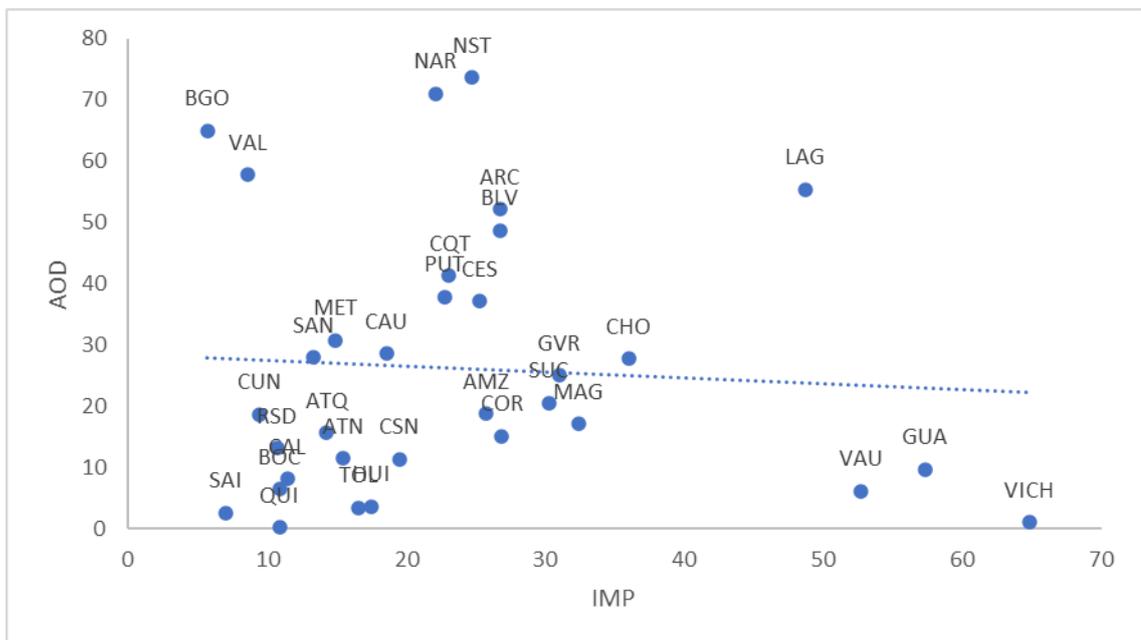
Fuente: IMP-DANE (2022) y APC (2022). Elaboración propia

Gráfico 6. Relación AOD departamento-IMP. Año 2020.



Fuente: IMP-DANE (2022) y APC (2022). Elaboración propia

Gráfico 7. Relación AOD departamento-IMP. Año 2021.



Fuente: IMP-DANE (2022) y APC (2022). Elaboración propia

Cuando se deja de lado los aspectos de la AOD y se estudia la relación entre desigualdad con factores como población y producción departamental, los resultados parecen responder a problemas estructurales del Estado.

Parece indicarse que la desigualdad está asociada a la concentración de población en el territorio. Esta concentración podría responder a los patrones de migración estudiados por Márquez (2010), y Granados (2010), cuando la población se ve forzada a migrar hacia los principales centros urbanos sea por fenómenos de violencia o mejores condiciones económicas. (Granados-Jiménez, 2010; Márquez Covarrubias, 2010). Ante la concentración de población y el aumento de la percepción de desigualdad y pobreza, las admiraciones de estas localidades buscan generar políticas públicas para disminuir esta problemática.

Esto permite indagar que existe una influencia económica de las regiones y las variables políticas que representan en términos electorales, esta última que se traduce el interés de las elites y sus organizaciones políticas de lo local a lo nacional (Milanese et al., 2017). Es decir, en este punto existen dos hipótesis:

La primera, los territorios marginales solo aportan explotación de recursos asociados a hidrocarburos como los son el carbón, petróleo, gas y en algunos casos minerales como coltán. Sin embargo, las industrias legales en estos territorios están asociadas al estado colombiano o bien a multinacionales, usan mano de obra calificada y están lejos de centros urbanos. La escasa diversificación del mercado y la concentración en una actividad productiva industrial no genera un mercado del trabajo importante y por consiguiente existe poca tendencia al desarrollo de nuevos centros urbanos.

En segundo lugar, la poca población resulta poco atractivo en el ámbito político, puesto que no se traduce en sitios potenciales electorales, por tal el político que actúa como tramitador de proyectos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones no tiene interés en desgastar el sistema en estos territorios (Orinoquia y zona amazónica). Por otro lado, la implementación de proyectos debe tener una población objetivo, en dichos territorios existen centros urbanos cuya comunicación es precaria por temas geográficos y conviven con comunidades indígenas protegidas en lo que se traduce problemas legales para desarrollo de cualquier actividad.

Al contar con datos oficiales respecto a la participación departamental en el PIB nacional y los respectivos resultados de IMP² para el mismo periodo de tiempo. Se ha elaborado una sistematización de los datos y ejercicios de análisis donde se indague la

² Índice de Pobreza Multidimensional, Fuente DANE.

posible asociación entre estas variables. En estos casos, el análisis conjunto de las variables población, PIB departamental y MPI permiten establecer que existe una tendencia negativa cercana a -0.5 según correlación de Pearson, no significa una relación causal, pero sí presupone la existencia de asociación y se ajusta a las hipótesis presentadas previamente.

En el caso de los grafico 6 y 7 para los datos disponibles entre 2018 y 2019 ³de cifras oficiales del DANE (2022), los departamentos que mayor aportación al PIB registran son también los principales centros económicos y urbanos del país. Estos concentran las principales poblaciones y a pesar de las falencias estructurales e institucionales como el fenómeno de corrupción, la desigualdad no esta tan marcada como en otros territorios.

La particularidad de estas regiones está asociada a un sistema político complejo y una administración regional robusta. Es decir, las poblaciones cumplen con planes de ordenamiento territorial, existe una articulación con el Estado central y los respectivos políticos tramitan en algún grado la demandas de lo local para así garantizar una base electoral que garantice sus organizaciones políticas.

Por otro lado, los procesos de descentralización y concentración de habitantes les otorgan privilegios administrativos y fiscales (Muñoz, 2016). Bajo esta dinámica, las administraciones locales no dependen tanto del estado central y del sistema de transferencia, ellos pueden generar ingresos fiscales a partir de impuestos específicos y distribuirlos según los planes de desarrollo de cada administración.

Otro factor interviniente es la multipolaridad de desarrollo. Los departamentos de Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Bogotá D.C., son el foco de atracción del capital privado, un mercado regional de abastecimiento, conglomerado educativo y mercado laboral⁴ (Rocha & Vivas, 1998; Sánchez Torres et al., 2019). Lo anterior indica que conviven dos flujos migratorios internos: periferia local a centros urbanos principales, y centros urbanos principales-Bogotá D.C (capital). El flujo de migración y las condiciones que presentan cada uno de los centros urbanos garantiza que la calidad de vida

³ Se toman los años 2018-2020 debido a que para la realización de este documento aún no se estimaba el valor total de PIB departamental y su participación en las cuentas nacionales. Lo cual, en caso de ser utilizado generaría un sesgo de análisis y modificaría los resultados, por tal se omite el año 2021 en el ejercicio de correlación como forma de disminuir el error.

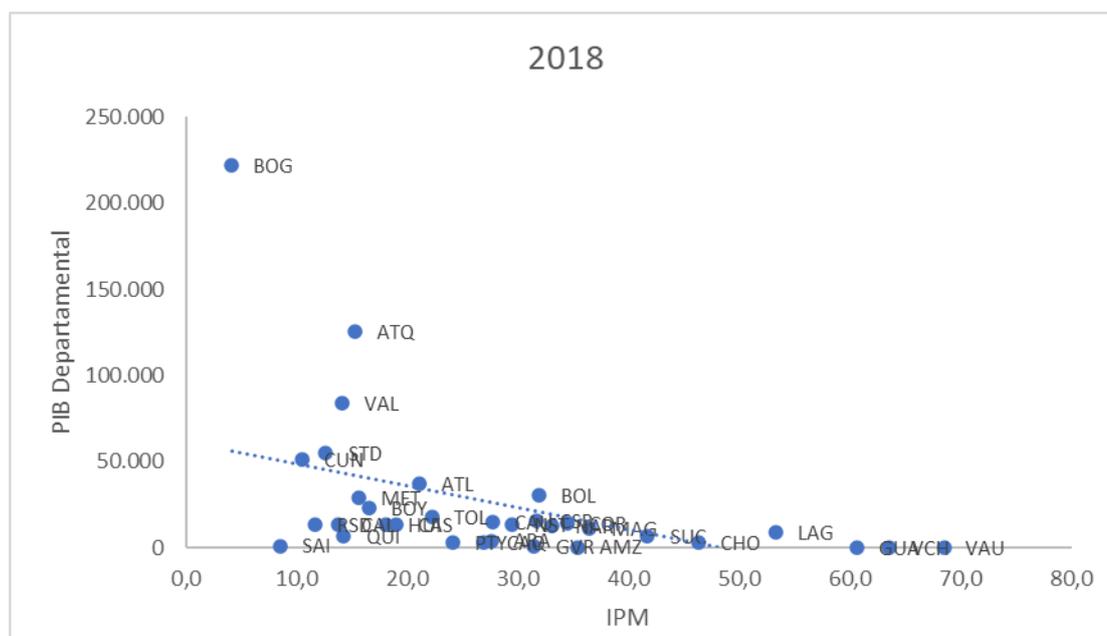
⁴ El anexo 2 presenta la participación al PIB nacional por departamento, mientras el anexo 3 el PIB per cápita departamental; por último, el anexo 4 expresa la proporción de la participación al total del PIB nacional. Los datos evidencian la disparidad en el desarrollo, teniendo en cuenta que los departamentos de mayor producción no son tan extensos como aquellos que concentran la desigualdad, y cuentan con mayor densidad poblacional.

de los ciudadanos sea comparativamente mejor a los territorios periféricos y marginales, estos últimos donde actúa la AOD y la cooperación no oficial de ONGD y RSC.

A partir del ejercicio de relación de variables realizado anteriormente, se compara con la nueva relación del IPM respecto PIB departamental como se mencionó en la metodología. Lo que se pretende es estudiar el grado de asociación de las variables para continuar con el análisis de factores que han determinado el desarrollo desigual de los departamentos a manera de complementar la discusión con respecto a la distribución de la AOD.

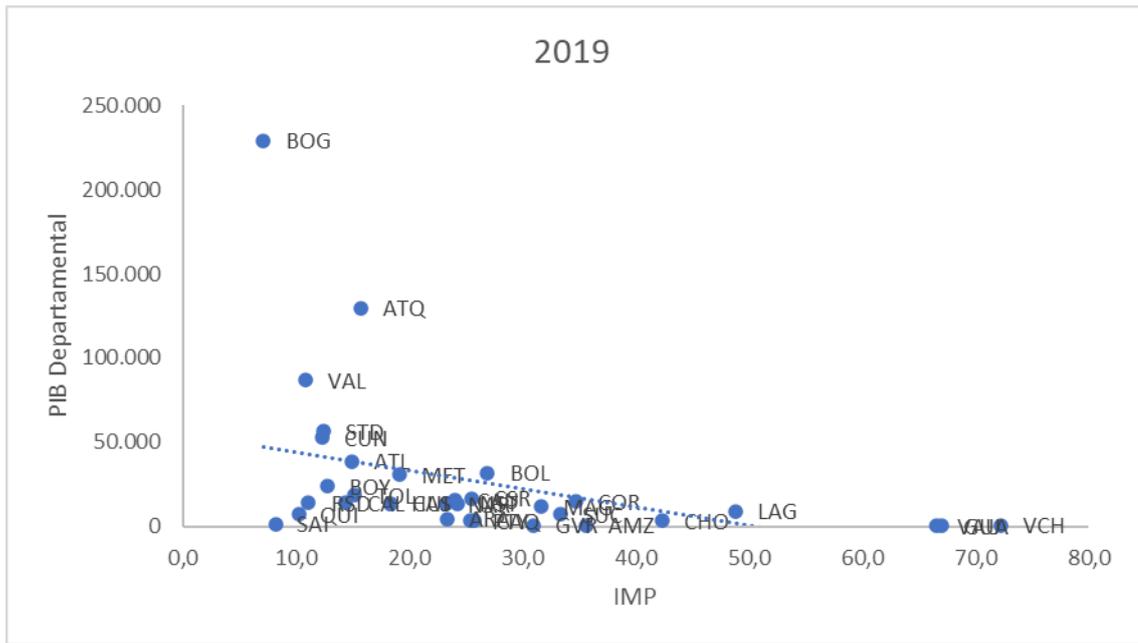
Los gráficos 8, 9, 10 y 11, en comparación sus anteriores, muestran un mayor grado de correlación, lo que traduce en mejores indicios para establecer una asociación sin que signifique un vínculo causal. El resultado parece indicar que la pobreza multidimensional reflejada en el IPM tiene mejores cifras en la medida que los departamentos poseen mejor economía, o bien tienen mayor participación del PIB. Algo importante, curiosamente los mismos departamentos que poseen peores indicadores de pobreza multidimensional poseen una dependencia hacia las transferencias de recursos desde el estado central y tienen una economía sustentada en la explotación de hidrocarburos similar a los propuesto por Acemoglu y Robinson (2012) en su libro “Por qué fracasan los países” (Acemoglu & Robinson, 2012).

Gráfico 8. Relación PIB departamento-IMP. Año 2018



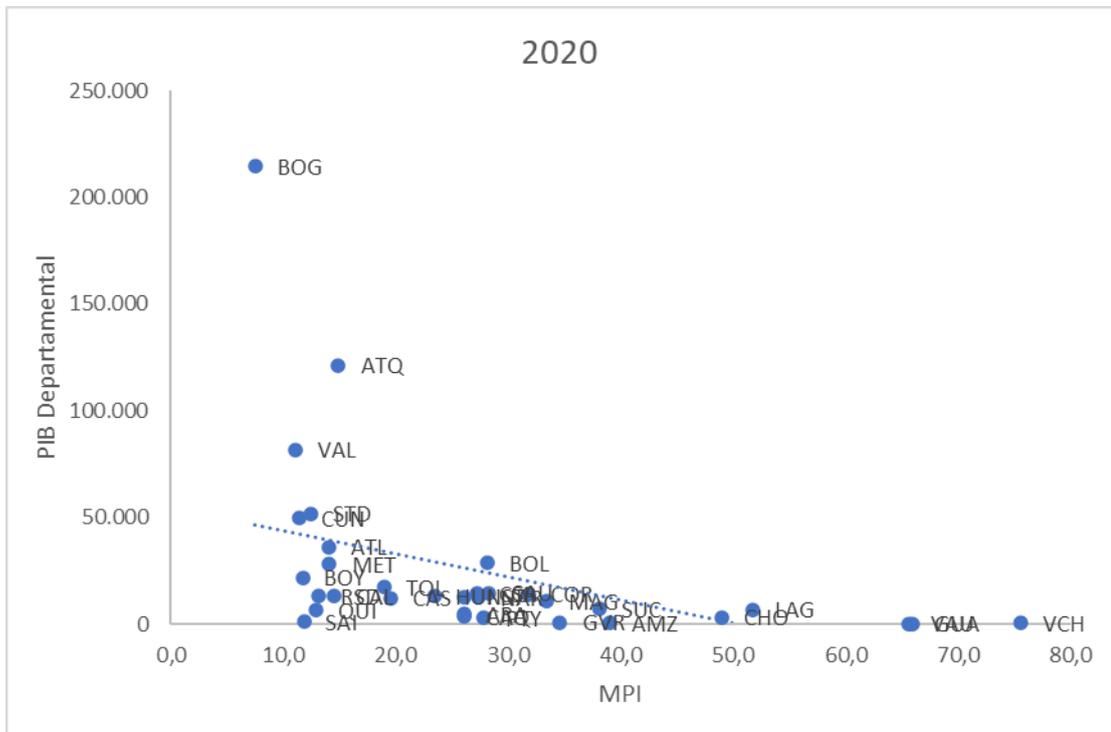
Fuente: Estadísticas DANE (2022). Elaboración propia.

Gráfico 9. Relación PIB departamento-IMP. Año 2019

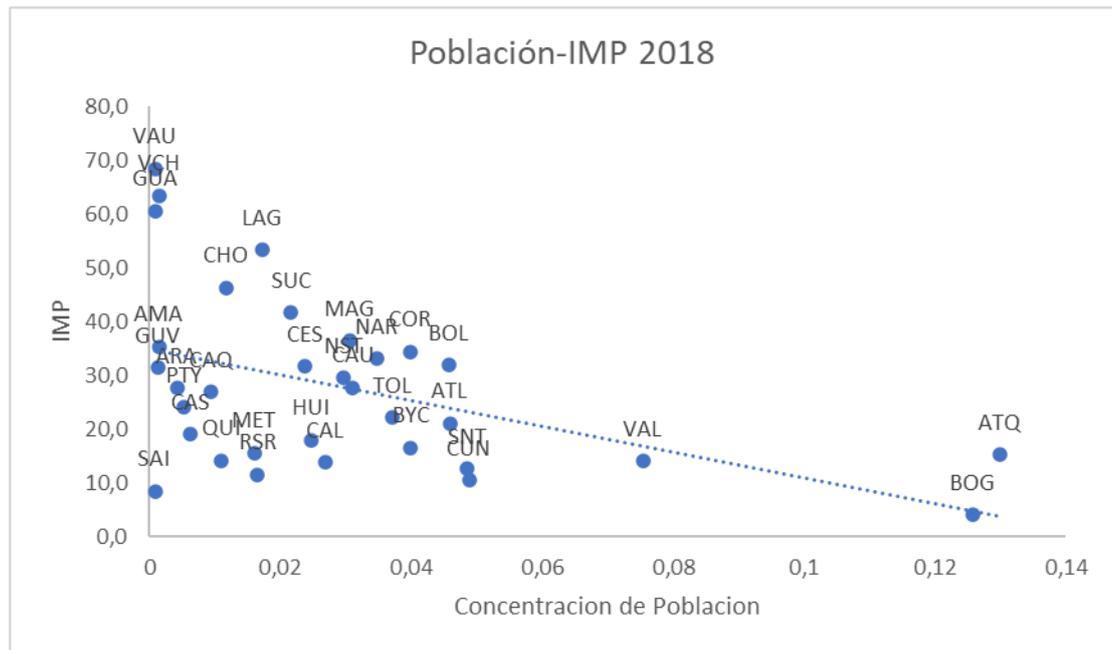


Fuente: Estadísticas DANE (2022). Elaboración propia.

Gráfico 10. Relación PIB departamento-IMP. Año 2020



Fuente: Estadísticas DANE (2022). Elaboración propia.

Gráfico 11. Relación proporción poblacional por departamento-IMP. Año 2018.

Fuente: Estadísticas DANE (2022). Elaboración propia.

Los análisis anteriores en contraposición a los resultados en los cuales intervenían los recursos de AOD son un poco más concluyentes. Estos permiten identificar que el factor demográfico descrito por algunos autores neoinstitucionalistas son determinantes para entender la disparidad de la administración de recursos que se ven representado en la pobreza multidimensional.

La disparidad entre los departamentos en cuanto a su concentración de población y sus niveles de desarrollo está explicada por el proceso de construcción de estos como regiones. Los departamentos con menores niveles de pobreza multidimensional suelen ser los mismo que tienen mayor concentración de la población. Estos han contado con la formación de un conglomerado industrial regional, donde está presente el sector agrícola, manufactura, servicios e industrias, es decir una diversificación de la producción. El progreso de estas regiones se convirtió en focos de atracción de población durante la primera mitad del siglo XX, así como centros naturales de atracción de las comunidades desplazadas. El aislamiento geográfico les permitió volverse competitivo en su nicho de mercado y garantizar un crecimiento en la medida que se adentraban a los demás mercados regionales (Ocampo, 1982)

Las repercusiones políticas de este proceso de formación industrial fueron el establecimiento de elites y comunidades políticas cuyo interés en las regiones permitía perpetuar su participación en el escenario político nacional. Por tal razón, las elites de los departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, por

ejemplo, procuraron el trámite de proyectos que garantizaran el desarrollo departamental de tal manera que en las sucesivas elecciones tanto locales como nacionales se reflejara en la renovación de los votos (Sáenz, 2010).

El conflicto interno fortaleció el desplazamiento de mano obra desde el campo a las ciudades, especialmente hacia las regiones industriales. En estos lugares, el aumento de mano de obra gozo de las políticas sociales de los gobiernos entre los 60 y 70, los cuales mejoraron las condiciones de vida a partir de recomendaciones y políticas de desarrollo externas como fueron las recomendaciones del BIRF, lo que aumento el acceso de viviendas, amplio la cobertura de educación e inserción a la vida laboral (de Guevara et al., 2018). Esto permitió el crecimiento de las ciudades, pero dejo el desarrollo del campo de lado, por su parte, los fenómenos de apropiación de la tierra a causa del conflicto son la razón de la desigualdad en la distribución de la tierra actual en Colombia (CNMH, 2018; Ruiz, 2011).

Con la firma del Acuerdo de Paz, el conflicto interno modifico su accionar, puesto que ya no contaba con la participación de las FARC como un agente a combatir. Lo que ocurrió fue un reordenamiento del poder sobre las rutas del narcotráfico y el área de influencia donde antes hacían presencia la extinta guerrilla. De la misma manera, el Estado fortaleció su presencia en los anteriores territorios marginados, lo que ha generado mayores oportunidades para fortalecer los esfuerzos contra la desigualdad. Algunos sectores de la población esperaban con ansias proyectos de reforma al sector rural que incluyera mayor apoyo al campesino y planes de distribución de la tierra, los cuales hasta el momento no se han estudiado (Duarte et al., 2017)

Algunas consideraciones finales respecto a la desigualdad que se han encontrado a lo largo de la investigación y no han tenido la oportunidad de estudiarse a fondo son: la distribución de la tierra, la planificación urbana y la participación política.

En esta línea se ha implementado proyectos sociales, que han buscado mejorar las condiciones de vida de la población como son los proyectos de urbanización para personas vulnerables y el acceso a créditos para fomentar la microempresa. Sin embargo, los programas se vieron afectados por la pandemia del COVID, puesto que gran parte, casi la totalidad de los beneficiarios estaban en la informalidad laboral y por ende las medidas sanitarias representaron la pérdida de casi la totalidad el ingreso en los hogares (Cárdenas et al., 2020).

La respuesta a esta crisis social fue la implementación de políticas para solventar las deudas y brindar un ingreso solidario mensual, el cual rápidamente se volvió insuficiente

por el incremento en la inflación. El aumento del gasto público y la presión de parte de entidades multilaterales de hacer ajustes macroeconómicos como una reforma fiscal, sumado a la desconfianza de la población colombiana hacia las instituciones por escándalos de corrupción en plena pandemia alimentó el descontento social. Lo que causó jornadas de paro que hasta el día de hoy aumentaron los niveles de inflación que la economía Colombia había manejado bien en comparación a la región.

Pachón (2021) en su investigación de la distribución de la tierra en Colombia detecta que, según las cifras oficiales, la desigualdad por coeficiente de Gini es 0.88, el tercero más desigual de Latinoamérica. Esta situación es un aspecto para resolver en la búsqueda de políticas que disminuyan la desigualdad, puesto que la garantía de una persona en condición de vulnerabilidad a tener una unidad de tierra productiva le permite trabajar, garantizar la seguridad alimentaria familiar y la producción de bienes que puedan ser comercializados, por otro lado, la titularidad de la tierra permite el acceso a créditos financieros especiales para el sector agrícola.

Sin embargo, la realidad del sector es otra, puesto que aún no se ha formulado un proyecto de distribución, la discusión se ha polarizado en la realidad nacional y del mismo modo podría afectar a miembros de las elites. Por otro lado, la implementación de este tipo de políticas no es suficiente, puesto que tendría que estar acompañada de un plan para formar el capital humano del campo, el conflicto armado trajo como consecuencia la destrucción de las comunidades rurales y una apatía al trabajo rural por sus rendimientos decrecientes a causa de las escasas políticas al campesinado (Ariza, 2021; Tassara, 2018).

Retomando un poco la situación de los territorios marginados, las poblaciones acentuadas presentan condiciones estructurales que generan situaciones similares a las trampas de pobreza. Su ubicación geográfica en medio de la selva, distantes entre sí, con vías de acceso limitadas y en zonas en conflicto las condena a estar sin una presencia efectiva del Estado. En consecuencia, la forma como se urbanizaron y los planes de desarrollo municipales no fueron prioritarios (Ramírez Cuervo et al., 2018).

Esto se complementa con los ODS y las metas naturales de los gobiernos de disminuir el abstencionismo electoral, dado que esto influye directamente en un aumento de la rendición de cuenta del gobierno y su administración de recursos. Sin que los análisis realizados arrojen una relación causal, resulta factible inducir a la explicación en la mayor concentración en centros urbanos implica mayor presión de dar solución problemas sociales, una dinámica muy común en el contexto latinoamericano. Las limitaciones geográficas como el acceso y vías de comunicación por la selva amazónica, la selva del

Darién el departamento del Choco y los llanos de la Orinoquia, han sido un constante en el aislamiento histórico de estas regiones, su urbanización o mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones establecidas.

Por último, la planificación urbana resulta siendo un factor fundamental que influye directamente en la pobreza multidimensional, puesto que enfoca los esfuerzo en la provisión de los bienes públicos necesarios para contribuir a la vida digna, y deja en la creación de un mercado laboral compartido entre el sector privado y el gasto público, la fuente de ingreso de la población.

Conclusiones

La iniciativa de realizar este trabajo estaba guiada en realizar una discusión crítica donde participan distintas visiones que han estudiado el desarrollo y han propuesto opciones críticas a las definiciones pactadas desde organismos internacionales. No obstante, la dialéctica entre desarrollo-progreso, o bien desarrollo-desigualdad parece una disyuntiva a la cual se deben enfrentar los académicos, y claro está, los gobiernos. Si existe una nación desarrollada es porque ha logrado ser más productiva en todos sus factores en comparación a otra. Incluso, el desarrollo parece ser el producto de una relación de dominación. Las actuales economías desarrolladas, han ejercido su papel hegemónico en las últimas décadas, e incluso algunas siempre han participado de la dominación.

La Ayuda Internacional al Desarrollo parece lidiar con esta lucha de egos entre los Estados. La investigación ha identificado que en justo en algunos gobiernos donde se han distanciado de su hegemonía histórica EE. UU., es donde otros gobiernos europeos han aumentado su flujo de ayuda, e incluso se ha enfatizado en la cooperación sur-sur. No obstante, tal vez una investigación podría profundizar la condicionalidad de estas ayudas, las cuales no están accesibles fácilmente, pero del que sí es posible identificar indicios que pueden formular un futuro planteamiento. Lo anterior sigue la lógica de los accesos a fuentes de financiación desde entidades como el BM y FMI, o bien la misma cooperación al desarrollo en el cual se sugieren implementar estrategias o enfoque en la realización de políticas públicas al interior de los estados, en este caso Colombia.

Lamentablemente este trabajo se ha quedado corto en algunos factores que pueden explicar otros fenómenos. Un primer elemento es la planeación urbana, esta práctica (por experiencia del autor) no suele cumplimentarse cabalmente en el urbanismo latinoamericano. En el caso de Colombia, la forma como crece las poblaciones está condicionada a la cesión de territorios contiguos para ser urbanizados, lo cual representa una acción que responde a intereses de las personas “donantes”.

El conflicto interno impulsó un comportamiento de las poblaciones afectadas en asentarse de manera irregular en las periferias inmediatas del límite urbano, o bien las zonas de ladera, las mismas que representan riesgo de deslizamiento durante las temporadas de lluvias. Este comportamiento supone la perpetración de la marginalidad y desigualdad, pero a la vez se convierte en una suerte para el clientelismo electoral, donde las necesidades básicas inmediatas de las personas son oportunidades de garantizar un voto.

En el caso de las poblaciones menos urbanas, las mismas que están establecidas en los territorios periféricos nacional, pareciesen gozar de mejor suerte cuando la RSC o la filantropía capitalista hace presencia. Las empresas representan no solo las oportunidades mejorar las opciones laborales, si no que pueden tomar un papel provisional de la función del Estado, el cual no ha logrado estar presente como si lo hace en otros territorios.

En este sentido resulta pertinente que los países en desarrollo y en el caso de Colombia, es menester impulsar la interconexión de las redes de transporte interno. De esta manera, el Estado puede facilitar su presencia, sin embargo, el reto para los países latinoamericanos es realizar esta tarea y evitar al mínimo el impacto ambiental.

Algunos autores que han estudiado la desigualdad sugieren la distribución de la tierra como estrategia para combatir este problema (Ariza, 2021). Sin embargo, no se considera los factores como los costos de mantenimiento de propiedad, los recursos necesarios para la producción de la tierra y la obtención de un ingreso, elemento necesario para satisfacer las necesidades básicas de la población. En otro sentido, actualmente el sector rural colombiano atraviesa por una crisis laboral y tecnológica; en primer lugar, no existe un estímulo para trabajar en el sector agrícola debido a los bajos niveles de ingreso y el abandono de la calidad de vida urbana, en segundo lugar, la producción agrícola resulta costosa a causa de la geografía y limitante frente al avance tecnológico, lo que genera dependencia a la mano de obra tradicional y aumento de los costos de producción.

Sin embargo, la distribución de la tierra representaría la oportunidad perfecta para el fortalecimiento de visiones alternativas al desarrollo como lo es Buen Vivir, en el cual el trabajo comunitario fortalecería el tejido humano del sector rural y mejoraría calidad de vida de la población víctima de la violencia. Esta estrategia, la cual es un compromiso adquirido por el estado colombiano a causa del Acuerdo de Paz (2016) y es de interés para los sectores progresistas de la política nacional, deberían estimularla con políticas públicas que acompañen el campesinado y disminuya la brecha de desigualdad social.

En suma, este trabajo no se considera concluyente, al contrario, esta abierto a su continuación investigativa. La investigación presento limitaciones a causa de distancia de recursos de información oficial que requerían visita presencial. Por otro, la eficiencia de la ayuda no es objetivamente cuantificable, puesto que los proyectos son sostenibles mientras que exista apropiación desde las comunidades. Si se quisiera investigar la efectividad de la AOD, y la sostenibilidad de los proyectos se necesitaría mayor cantidad de tiempo para clasificar e investigar a fondo la actualidad de estos planes de cooperación en Colombia, elemento que es limitado en la distancia.

Como se ha expuesto previamente, aún quedan factores a considerar que pueden servir para la creación de modelos econométricos que busquen dar respuesta a la tendencia de la desigualdad. Sin embargo, nunca fue objetivo proponer dichas herramientas, la opción de la construcción de este se presentó en la medida que se recopilaban datos y se sistematizaba. Sin embargo, es necesario aceptar que el tiempo corrió en contra a la hora de proponer un modelo econométrico que pudiera acompañar la discusión.

Por último, el texto presente un sesgo que el lector debe tener en cuenta. Se presenta desde el análisis de la Ciencia Política. Por tal razón, los análisis suelen caer en una tendencia de las relaciones de poder y la participación de variables asociadas a la participación política y la dinámica electoral. Dichos elementos pueden explicar las limitaciones presentadas en el desarrollo, deben estudiarse bajo otras metodologías no aplicables por el contexto con el que se escribe este documento, pero el cual sería de interés para análisis la relación régimen político y desarrollo.

IV. Bibliografía

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. Barcelona: Deusto.
- Acosta, A. (2009). El Buen Vivir, una oportunidad por construir. *Ecuador Debate*, 75, 33–48.
- Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. (2020). Herramientas para la formulación de proyectos de cooperación internacional. 1–52. <https://www.apccolombia.gov.co/Herramientas-para-la-formulacion-de-proyectos-de-cooperacion-internacional>
- Alonso, J. A., & Garcimartín, C. (2011). El impacto de la ayuda internacional sobre la calidad de las instituciones. *EKONOMIAZ. Revista vasca de Economía*, 77(02), 158–175.
- APC-Colombia. (2021). Ayuda Oficial al Desarrollo. <https://www.apccolombia.gov.co/node/2325>
- Ariza, F. A. P. (2021). Distribution of rural property in Colombia during the XXI Century. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 60(4), 1–18. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.242402>
- Banco Mundial. (2022). Banco de datos. Indicadores del desarrollo mundial. <https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators>
- Bargain, O., & Aminjonov, U. (2021). Poverty and COVID-19 in Africa and Latin America. *World Development*, 142, 105422. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105422>
- Bejarano, J. A. (1998). *Economía de la Agricultura*. Tercer Mundo.
- BID. (2020). *La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada* (M. Busso & J. Messina (Eds.)).
- Calderón Rojas, J. (2016). *Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto*. Filosofía, historia y política.
- Cárdenas, J., Robles-Rivera, F., & Martínez-Vallejo, D. (2020). Élités empresariales y desigualdad en tiempos de pandemia en América Latina. *Revista Española de Sociología*, 29(3), 715–726. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.45>
- Celis, L. (2017). Economic Extractivism and Agrarian Social Movements: Perspectives on Low-Intensity Democracy in the Face of the Colombian Conflict. *Latin American Perspectives*, 44(5), 145–161. <https://doi.org/10.1177/0094582X17719037>
- Cervellati, M., Fortunato, P., & Sunde, U. (2008). HOBBS TO ROUSSEAU: INEQUALITY, INSTITUTIONS AND DEVELOPMENT. *The Economic Journal*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/20108863>
- CNMH. (2018). *Tierras: Balance del CNMH al esclarecimiento Histórico*. <http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/informes/informes-2018/tierras-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico>

- Colombia : Learning the Foreign Policy Process Author (s): Gerhard Drekonja-Kornat
Source : Journal of Interamerican Studies and World Affairs , Vol . 25 , No . 2 (May ,
1983), Published by: Cambridge University Press Stable URL :
<https://www.jstor.org/stable/229-250>.
- DANE. (2022). Pobreza Monetaria y Multidimensional. Pobreza y desigualdad.
[https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad](https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad)
- de Guevara, R. D. L., Prieto, A. V., Blanco, L., Roa, E., Cáceres, L. S., & Vargas, L. A. (2018).
Characteristics of the Colombian solidarity economy. Approaches to influential
currents in Colombia. CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, 93, 85–113. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.93.10327>
- De Sousa Santos, B. (2014). Derechos humanos, democracia y desarrollo.
- Di Pasquo, F., Klier, I. G., & Busan, T. (2018). Orden mundial , hegemonía y problemática
ambiental World Order , Hegemony and Environmental Issues. Sociedad y
Ambiente, 7(18), 95–116.
- Duarte, L., González, C., & Mesa, J. (2017). Retos de la cooperación internacional para el
desarrollo de en Colombia. Estudios internacionales (Santiago), 49(188), 111–146.
[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
37692017000400111&lng=en&nrm=iso&tlng=en](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692017000400111&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
- Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: Postdesarrollo y transiciones hacia el
pluriverso. Revista de Antropología Social, 21(1), 23–62.
https://doi.org/10.5209/rev_raso.2012.v21.40049
- Escobar, A. (2018). América Latina en una encrucijada: ¿modernizaciones alternativas,
posliberalismo o posdesarrollo? En V. Bretón (Ed.), Saturno devora a sus hijos.
Miradas críticas sobre el desarrollo y sus promesas (pp. 33–85). Icaria.
- Esteban, G. F., & Pastó, J. A. (2011). Calidad institucional y crecimiento económico :
nuevos avances y evidencia. Ekonomiaz, 77(2), 127–157.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3710033>
- Galindo Martín, M. Á. (2009). Gobernanza y crecimiento económico. Revista de Economía
Mundial, 23, 180–196. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86612461009>
- Galvis-Aponte, L. A., Bonet-Morón, J., Bonilla-Mejía, L., Otero-Cortés, A. S., Pérez-Valbuena,
G. J., Posso-Suárez, C. M., & Ricciulli-Marín, D. C. (2021). Desigualdades del ingreso
en Colombia: ¿cuáles son sus determinantes y cómo se han afectado por la
pandemia del Covid-19? (Vol. 101).
- Gavina Mesa, J. I., Granda Viveros, M. L., Lopez Medina, J. D., & Cano, R. V. (2018). Rural
inequality and armed internal conflict in Colombia: A vicious circle. Izquierdas, 39,
209–228.
- González, Francisco. (1999). “Instituciones, políticas públicas y desarrollo”, en: Revista
Economía Institucional, vol. 1, No. 1, pp. 143-151, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia.
- Granados-Jiménez, J. (2010). Las migraciones internas y su relacion con el desarrollo en
Colombia. Una aproximación desde algunos estudios no clasificados como
migración interna de los ultimos 30 años. En Tesis de Maestría. Pontificia
Universidad Javeriana. [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
33645547325%7B%7DpartnerID=40%7B%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb3
92381256da](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B%7DpartnerID=40%7B%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da)

- Gudynas, E. (2016). Beyond varieties of development: Disputes and alternatives. *Third World Quarterly*, 37(4), 721–732. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1126504>
- Illich, I. (1992). Needs. En *The development dictionary* (pp. 88–101). Zed Books.
- Invias. (2022). Mapa de Carreteras. Mapa de carreteras. <https://hermes.invias.gov.co/carreteras/>
- Jones, Gareth. (1983). "Transaction costs, property rights and organizational culture: An exchange perspective", en: *Administrative Science Quarterly*, vol. 28, No. 3, p. 454-467, USA, Cornell University.
- Kalmanovitz Krauter, S. (2005). El neoinstitucionalismo como escuela. *Economía Institucionalm*, 7, 189–212.
- Kalmanovitz Krauter, S., Brando, C. A., López Rivera, E., & Jaimes, C. A. (2017). Breve historia económica de Colombia.
- Kalmanovitz, Salomón. (2004). Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, Bogotá, D.C., Grupo Editorial Norma.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (2000). La gobernabilidad es fundamental, del análisis a la acción. *International Monetary Fund*, 10–13. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/kauf.pdf>
- Keohane, R. O. (1989). "Neoliberal institutionalism: A perspective on world politics". Boulder, CO.: Westview Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1999). *Power and Interdependence*. Pearson.
- Kimbrough, K. P. (1986): "Foreign Aid and Optimal Fiscal Policy", *Canadian Journal of Economics*, 19 (February), 35-61.
- Lahera, Eugenio. (1996). "Aspectos políticos e institucionales de la propuesta de la CEPAL", en: *Revista Comercio Exterior*, vol. 46, No. 7, México, D.F.
- León, D. F. (2017). Conflicto, pobreza y desigualdad en Colombia: Un análisis a partir del enfoque de capacidades de Amartya Sen. *Cambios y Permanencias*, 634–660.
- León, Nohra. (2002). El enfoque institucional del desarrollo económico, Documento derivado del proceso investigativo "Los cambios en la racionalidad económica: una evaluación de la ética y la moral en los patrones actuales de desarrollo", Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- León, Nohra. (2006). *Mecanismos para la regulación ambiental*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Londoño Díaz, W., & Prado Mejía, A. (2021). Experiences of citizenship in precarization: An ethnography from northern Colombia in the time of COVID-19. *Heliyon*, 7(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07659>
- Márquez Covarrubias, H. (2010). Desarrollo y migración: una lectura desde la economía política crítica. *Migración y Desarrollo*, 08(14), 59–87. <https://doi.org/10.35533/myd.0814.hmc>
- Masías Núñez, R. (2017). Los investigadores de la Ciencia Política en Colombia. Realización científica y desigualdad social. *Estudios Políticos (Medellín)*, 51, 79–105. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n51a05>

- Melo, J. O. (1982). La evolución económica de Colombia 1830-1900. Manual de Historia de Colombia. Tomo II, 135–208.
- Milanese, J. P., Abadía, A. A., Rodríguez, A., & Cuervo, B. (2017). Configuración de los apoyos electorales a nivel municipal. Un análisis de los resultados electorales para la Alcaldía de Cali, Colombia (2003-2015). *Colombia Internacional*, 90, 67–98. <https://doi.org/10.7440/colombiaint90.2017.03>
- Morales, G. A. (2019). LOS CUATRO MUNDOS DE AMÉRICA LATINA. Clivajes sociales y hemisféricos en el temprano siglo XXI. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana: Sello Editorial Javeriano.
- Morales, J. S. (2018). The impact of internal displacement on destination communities: Evidence from the Colombian conflict. *Journal of Development Economics*, 131, 132–150. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.10.003>
- Muñoz, B. (2016). La pereza fiscal como problema relevante en la descentralización. *En Contexto*, 4(4), 141–157.
- North, D. (1995). instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
- North, Douglass C; Acemoglu Daron; Fukuyama Francis; Rodrik, D. (2015). Governance, Growth and development decision-making. PhD Proposal, 1. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ocampo, J. A. (1982). Desarrollo exportador y desarrollo capitalista colombiano en el siglo XIX. *En Desarrollo y sociedad* (Vol. 8, pp. 37–75).
- Ocampo, J. A. (2015). *Gobernanza global y Desarrollo*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38855/1/GobernanzaGlobalyDesarrollo.pdf>
- Ocampo, J. A. (2019). Una brevísimas historia económica de Colombia. *La Republica*. <https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevissima-historia-economica-de-colombia-2887660>
- OCDE. (2017). Estudios Económicos de la OCDE Colombia. 46. www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-colombia.htm
- OCDE. (2022). Colombia 2022. Estudios Economicos de la OCDE. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-colombia-2022_991f37df-es#page2
- Panizza, U. (2017, octubre). El uso de indicadores de corrupción en las calificaciones soberanas. Banco Interamericano de Desarrollo. BID. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17296/el-uso-de-indicadores-de-corrupcion-en-las-calificaciones-soberanas>
- Perry, G., & Saavedra, V. (2018). Corrupción, Crecimiento y Desarrollo Elementos para una estrategia integral anticorrupción en Colombia. *En Seminario. Propuestas de política pública para la lucha contra la corrupción*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>
- Perry, G., Saavedra, V., Cepeda U., F., Hernández, A., Pachón, M., Ungar, E., Zuleta, M. M., Medellín, J. C., Conde, F., Newman, V., Ángel, M. P., Dávila, M. X., Villadiego, C., & Hernández, J. S. (2018). *Integral La Corrupción En Colombia: Reflexiones y*

- propuestas (L. Villar, D. Álvarez, & Fedesarrollo (Eds.)).
<http://hdl.handle.net/11445/3642>
- PNUD. (2022). Colombia | Informes de Desarrollo Humano 2021.
<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COL>
- Portes, A. (2007). *Instituciones y Desarrollo: Una Revisión Conceptual* Author (s): Alejandro Portes Published by : Instituto de Desarrollo Económico Y Social Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/30037123> Accessed : 29-04-2016 10 : 20 UTC INSTITUCIONES Y DESARROLLO : Desarrollo Económico, 46(184), 475–503. <https://www.jstor.org/stable/30037123>
- Portes, A., & Smith, L. D. (2011). Published by : Instituto de Desarrollo Económico Y Social. 50(200), 491–520.
- Quijano, A. (1999). COLONIALIDAD DEL PODER , CULTURA Y CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA. 24(51), 137–148.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World-System Research*, 2, 342–386.
- Quijano, A., & Assis Clímaco, D. (2014). Cuestiones y horizontes. En Colección antologías, CLACSO.
- Quintero, P. (2020). Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad en América Latina. *Papeles de Trabajo. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural*, 19, 1–15. <https://doi.org/10.35305/revista.v0i19.122>
- Ramírez Cuervo, S. M., Barbieri, A. F., & Rigotti Rangel, J. I. (2018). La Migración Interna En Colombia En La Transición Al Siglo XXI. Una Aproximación Multiescalar. *Revista Latinoamericana de Población*, 50–68. <https://doi.org/10.31406/n22a4>
- Rocha García, R. (2014). La Riqueza del Narcotráfico y la desigualdad en Colombia. *Revista Criminalidad*, 56(2), 273–290. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082014000200007&lng=en&tlng=en
- Rocha, R., & Vivas, A. (1998). Crecimiento regional en Colombia: ¿Persiste la desigualdad? En *Revista de Economía del Rosario* (Vol. 1, Número 1, pp. 67–108). <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/946>
- Rodrik, D. (1996): “Understanding Economic Policy Reform”, *Journal of Economic Literature*, 34, 9-41.
- Ruiz, N. (2011). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. *Estudios Demográficos Y Urbanos*, 26(76), 141–177.
- Sáenz, J. D. (2010). *Élite política y construcciones de ciudad. Cali 1958-1998*. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cies-icesi/20170726043644/pdf_437.pdf
- Safford, F., & Palacios, M. (2011). *Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia*.
- Said, E. (2004). *Cultura e imperialismo*. Anagrama.
- Sánchez Torres, R. M., Torres Méndez, L. F., & Ramírez Nariño, L. A. (2019). Niveles de ingreso y desigualdad en Colombia: un estudio econométrico por departamentos.

VI. Anexos

A.1. Índice de Pobreza Multidimensional

| Departamento | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|
| | Total | Cabeceras | Centros poblados y rural disperso | Total | Cabeceras | Centros poblados y rural disperso | Total | Cabeceras | Centros poblados y rural disperso | Total | Cabeceras | Centros poblados y rural disperso |
| Amazonas | 35,4 | 27,4 | 42,1 | 35,6 | 19,5 | 49,6 | 39,0 | 24,3 | 53,5 | 25,7 | 23,0 | 28,4 |
| Antioquia | 15,3 | 9,6 | 35,4 | 15,7 | 10,2 | 35,9 | 14,9 | 10,2 | 32,7 | 14,3 | 10,8 | 28,0 |
| Arauca | 27,6 | 24,6 | 33,3 | 23,3 | 20,5 | 28,6 | 26,1 | 23,4 | 31,1 | 26,8 | 25,8 | 28,7 |
| Atlántico | 21,1 | 20,0 | 39,5 | 14,9 | 13,7 | 38,0 | 14,1 | 13,1 | 33,9 | 15,5 | 14,8 | 29,6 |
| Bogotá D.C. | 4,1 | 4,1 | 19,2 | 7,1 | 7,1 | 16,5 | 7,5 | 7,5 | 15,4 | 5,7 | 5,7 | 19,4 |
| Bolívar | 31,9 | 25,6 | 50,5 | 26,9 | 21,4 | 42,9 | 28,1 | 21,5 | 47,1 | 26,8 | 21,5 | 41,8 |
| Boyacá | 16,5 | 7,9 | 28,5 | 12,8 | 5,0 | 23,9 | 11,7 | 4,3 | 22,4 | 10,9 | 5,4 | 19,1 |
| Caldas | 13,8 | 10,1 | 24,6 | 14,3 | 10,4 | 25,8 | 14,5 | 8,7 | 32,8 | 11,5 | 8,7 | 20,4 |
| Caquetá | 26,9 | 20,5 | 38,6 | 25,7 | 19,2 | 37,7 | 26,1 | 18,4 | 40,5 | 23,1 | 15,9 | 36,6 |
| Casanare | 19,0 | 14,5 | 29,6 | 18,3 | 15,1 | 26,2 | 19,6 | 14,3 | 32,8 | 19,5 | 16,4 | 27,3 |
| Cauca | 27,7 | 13,2 | 36,2 | 24,0 | 10,6 | 31,8 | 28,2 | 12,3 | 37,4 | 18,6 | 10,5 | 23,2 |
| Cesar | 31,7 | 26,5 | 47,6 | 25,5 | 20,5 | 40,7 | 27,2 | 20,7 | 46,8 | 25,3 | 20,8 | 39,1 |
| Chocó | 46,3 | 29,4 | 60,3 | 42,3 | 26,7 | 55,1 | 49,0 | 33,5 | 61,5 | 36,0 | 25,3 | 44,4 |
| Córdoba | 34,4 | 21,1 | 49,2 | 34,7 | 23,2 | 47,2 | 31,8 | 21,8 | 42,6 | 26,9 | 14,1 | 40,6 |
| Cundinamarca | 10,5 | 6,8 | 20,0 | 12,3 | 9,4 | 20,5 | 11,4 | 9,4 | 17,1 | 9,4 | 8,1 | 13,3 |
| Guainía | 60,6 | 44,0 | 72,6 | 67,0 | 39,9 | 87,7 | 65,9 | 43,1 | 84,5 | 57,3 | 45,7 | 67,1 |
| Guaviare | 31,4 | 22,8 | 42,1 | 30,9 | 26,5 | 36,7 | 34,6 | 27,5 | 43,8 | 31,0 | 24,2 | 40,0 |
| Huila | 18,0 | 12,1 | 27,0 | 18,3 | 12,5 | 27,1 | 23,4 | 13,1 | 39,0 | 17,5 | 11,8 | 26,1 |
| La Guajira | 53,3 | 31,3 | 72,9 | 48,8 | 28,1 | 68,2 | 51,7 | 30,1 | 72,7 | 48,7 | 26,3 | 70,7 |
| Magdalena | 36,4 | 31,1 | 48,5 | 31,6 | 24,6 | 47,8 | 33,4 | 27,3 | 47,0 | 32,4 | 27,2 | 43,7 |
| Meta | 15,6 | 10,7 | 31,4 | 19,1 | 17,8 | 23,1 | 14,1 | 9,7 | 28,2 | 14,9 | 11,3 | 26,4 |
| Nariño | 33,1 | 22,0 | 41,7 | 23,2 | 18,4 | 26,9 | 27,3 | 15,0 | 36,8 | 22,1 | 13,4 | 28,9 |
| Norte de Santa | 29,5 | 25,9 | 43,0 | 24,2 | 19,3 | 42,8 | 26,1 | 20,8 | 46,2 | 24,7 | 19,7 | 44,0 |
| Putumayo | 24,1 | 17,5 | 30,8 | 25,4 | 22,1 | 28,7 | 27,8 | 22,6 | 33,2 | 22,8 | 16,5 | 29,4 |
| Quindío | 14,2 | 13,5 | 19,0 | 10,2 | 9,1 | 18,0 | 12,9 | 11,8 | 21,0 | 10,9 | 10,0 | 17,1 |
| Risaralda | 11,6 | 7,0 | 28,0 | 11,1 | 6,5 | 28,2 | 13,1 | 8,9 | 29,5 | 10,7 | 8,0 | 21,5 |
| San Andrés | 8,5 | 8,5 | | 8,2 | 8,2 | | 11,9 | 11,9 | | 7,0 | 7,0 | |
| Santander | 12,6 | 8,2 | 26,8 | 12,4 | 8,8 | 24,1 | 12,5 | 8,2 | 26,6 | 13,3 | 9,1 | 27,3 |
| Sucre | 41,7 | 32,8 | 56,8 | 33,3 | 25,4 | 46,6 | 38,1 | 29,5 | 52,2 | 30,3 | 23,7 | 41,0 |
| Tolima | 22,2 | 11,8 | 44,7 | 15,2 | 8,4 | 30,0 | 19,0 | 12,1 | 34,0 | 16,6 | 11,0 | 29,0 |
| Valle del Cauca | 14,1 | 12,5 | 23,2 | 10,8 | 9,3 | 19,4 | 11,1 | 8,9 | 24,1 | 8,6 | 6,9 | 18,6 |
| Vaupés | 68,5 | 27,4 | 82,9 | 66,5 | 25,4 | 80,1 | 65,6 | 26,8 | 81,3 | 52,7 | 22,3 | 64,8 |
| Vichada | 63,5 | 33,7 | 73,0 | 72,2 | 35,7 | 84,0 | 75,6 | 46,6 | 85,1 | 64,8 | 38,3 | 73,4 |

Fuente: Datos tomados del DANE. Gran Encuesta de Calidad de Vida. Pobreza Monetaria y Desigualdad Multidimensional. Elaboración Propia.

A.2. Producto Interno Bruto departamental

PIB

| DEPARTAMENTOS | 2018 | 2019 | 2020 ^P |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| COLOMBIA | 854.008 | 881.224 | 819.114 |
| Amazonas | 648 | 666 | 615 |
| Antioquia | 125.173 | 129.672 | 121.300 |
| Arauca | 4.293 | 4.596 | 4.565 |
| Atlántico | 37.610 | 38.690 | 36.173 |
| Bogotá D.C. | 221.652 | 229.314 | 214.485 |
| Bolívar | 30.804 | 31.920 | 28.623 |
| Boyacá | 23.237 | 23.732 | 21.709 |
| Caldas | 13.395 | 13.798 | 13.174 |
| Caquetá | 3.525 | 3.596 | 3.387 |
| Casanare | 13.291 | 13.493 | 12.245 |
| Cauca | 15.139 | 15.614 | 14.630 |
| Cesar | 16.090 | 16.646 | 14.256 |
| Chocó | 3.202 | 3.341 | 3.264 |
| Córdoba | 14.196 | 14.774 | 13.915 |
| Cundinamarca | 51.551 | 52.890 | 49.779 |
| Guainía | 313 | 322 | 293 |
| Guaviare | 693 | 715 | 683 |
| Huila | 13.369 | 13.754 | 13.144 |
| La Guajira | 8.977 | 8.955 | 6.684 |
| Magdalena | 11.248 | 11.525 | 10.832 |
| Meta | 29.404 | 30.800 | 28.105 |
| Nariño | 12.643 | 13.064 | 12.501 |
| Norte de Santander | 13.347 | 13.550 | 12.804 |
| Putumayo | 3.393 | 3.284 | 2.830 |
| Quindío | 6.793 | 6.968 | 6.550 |
| Risaralda | 13.551 | 13.969 | 13.185 |
| San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago) | 1.373 | 1.416 | 1.139 |
| Santander | 54.942 | 56.515 | 51.681 |
| Sucre | 7.108 | 7.366 | 6.928 |
| Tolima | 18.120 | 18.512 | 17.237 |
| Valle del Cauca | 84.172 | 87.023 | 81.835 |
| Vaupés | 248 | 257 | 237 |
| Vichada | 556 | 581 | 554 |

Fuente: Datos tomados del DANE. Cuentas Nacionales.

A.3 . Producto Interno Bruto per cápita por departamento

PIB pc

| DEPARTAMENTOS | 2018 | 2019 | 2020 ^P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| COLOMBIA | 20.468.749 | 21.460.744 | 19.826.701 |
| Amazonas | 9.912.411 | 10.394.169 | 9.723.923 |
| Antioquia | 22.112.974 | 23.443.301 | 22.220.442 |
| Arauca | 19.418.997 | 20.059.733 | 17.241.178 |
| Atlántico | 17.104.546 | 17.654.317 | 16.379.691 |
| Bogotá D.C. | 34.258.181 | 36.023.838 | 33.601.347 |
| Bolívar | 17.105.509 | 17.969.999 | 15.880.266 |
| Boyacá | 22.083.734 | 23.213.351 | 21.311.520 |
| Caldas | 15.738.292 | 16.871.662 | 16.554.258 |
| Caquetá | 10.132.201 | 10.620.553 | 10.132.252 |
| Casanare | 36.877.466 | 38.418.352 | 31.122.928 |
| Cauca | 11.935.202 | 12.686.194 | 12.193.333 |
| Cesar | 17.710.537 | 16.547.877 | 13.551.887 |
| Chocó | 7.062.349 | 7.718.663 | 8.122.854 |
| Córdoba | 9.412.988 | 10.107.441 | 9.798.925 |
| Cundinamarca | 20.241.029 | 20.454.302 | 18.891.663 |
| Guainía | 7.556.202 | 7.878.262 | 7.230.063 |
| Guaviare | 9.464.246 | 9.825.676 | 9.483.759 |
| Huila | 14.530.595 | 15.467.923 | 14.804.631 |
| La Guajira | 13.493.547 | 12.102.423 | 8.733.947 |
| Magdalena | 9.862.749 | 10.186.731 | 9.532.787 |
| Meta | 33.981.128 | 36.588.669 | 29.565.552 |
| Nariño | 9.097.870 | 9.765.246 | 9.616.743 |
| Norte de Santander | 10.352.471 | 10.405.660 | 9.714.273 |
| Putumayo | 11.584.128 | 11.445.298 | 9.340.389 |
| Quindío | 14.725.788 | 15.574.662 | 14.845.890 |
| Risaralda | 16.829.248 | 17.929.495 | 17.170.119 |
| San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago) | 24.985.543 | 26.238.950 | 21.116.373 |
| Santander | 29.190.314 | 30.892.441 | 27.169.372 |
| Sucre | 8.976.959 | 9.361.477 | 8.819.478 |
| Tolima | 15.788.947 | 16.869.492 | 16.061.417 |
| Valle del Cauca | 21.424.516 | 22.893.005 | 21.998.382 |
| Vaupés | 6.897.674 | 7.094.452 | 6.429.558 |
| Vichada | 5.889.111 | 6.221.545 | 5.987.127 |

Fuente: Datos tomados del DANE. Cuentas Nacionales.

A.4. Aporte Departamental al PIB nacional

PIB aporte dptarl

| DEPARTAMENTOS | 2018 | 2019 | 2020 ^P |
|--|-------|-------|-------------------|
| COLOMBIA | 1 | 1 | 1 |
| Amazonas | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Antioquia | 14,66 | 14,71 | 14,81 |
| Arauca | 0,50 | 0,52 | 0,56 |
| Atlántico | 4,40 | 4,39 | 4,42 |
| Bogotá D.C. | 25,95 | 26,02 | 26,19 |
| Bolívar | 3,61 | 3,62 | 3,49 |
| Boyacá | 2,72 | 2,69 | 2,65 |
| Caldas | 1,57 | 1,57 | 1,61 |
| Caquetá | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Casanare | 1,56 | 1,53 | 1,49 |
| Cauca | 1,77 | 1,77 | 1,79 |
| Cesar | 1,88 | 1,89 | 1,74 |
| Chocó | 0,37 | 0,38 | 0,40 |
| Córdoba | 1,66 | 1,68 | 1,70 |
| Cundinamarca | 6,04 | 6,00 | 6,08 |
| Guainía | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Guaviare | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Huila | 1,57 | 1,56 | 1,60 |
| La Guajira | 1,05 | 1,02 | 0,82 |
| Magdalena | 1,32 | 1,31 | 1,32 |
| Meta | 3,44 | 3,50 | 3,43 |
| Nariño | 1,48 | 1,48 | 1,53 |
| Norte de Santander | 1,56 | 1,54 | 1,56 |
| Putumayo | 0,40 | 0,37 | 0,35 |
| Quindío | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| Risaralda | 1,59 | 1,59 | 1,61 |
| San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago) | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| Santander | 6,43 | 6,41 | 6,31 |
| Sucre | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| Tolima | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
| Valle del Cauca | 9,86 | 9,88 | 9,99 |
| Vaupés | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Vichada | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Fuente: Datos tomados del DANE. Cuentas Nacionales.

A.5. Ayuda Oficial al desarrollo en miles de millones USD por departamento 2011-2021.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AMAZONAS | 3,87620716 | 1,35968517 | 0,15114242 | 0,44822258 | 10,4 | 14,0369654 | 13,8068728 | 12,1739548 | 11,8263255 | 8,3764541 | 18,7521008 |
| ANTIOQUIA | 27,4009722 | 4,9126561 | 2,49175559 | 10,9229401 | 29,4191781 | 18,9597971 | 3,04978052 | 8,67744779 | 12,3461483 | 14,7794588 | 15,5927835 |
| ARAUCA | 1,08417502 | 1,91157573 | 2,61926779 | 8,173246 | 11,1356364 | 23,3787601 | 2,55261555 | 4,47893877 | 37,3913536 | 23,0108688 | 52,1742458 |
| ARCHIPIÉLAGO DE S/ | 11,4878501 | 0 | 0 | 2,55253445 | 0,570204 | 0 | 0,45275999 | 0 | 0,15721123 | 3,29552174 | 2,60489089 |
| ATLÁNTICO | 5,93080323 | 3,36642084 | 0,40928192 | 1,88091439 | 0,31608489 | 2,11000343 | 0,43948223 | 1,22595488 | 8,7048878 | 1,31273548 | 11,4605163 |
| BOGOTÁ D.C. | 12,3226071 | 7,76020658 | 4,64794452 | 5,59209861 | 11,587731 | 20,1410463 | 2,54941184 | 5,14164672 | 21,2703051 | 72,9376603 | 64,9942542 |
| BOLÍVAR | 27,1904481 | 9,68804836 | 43,9375519 | 17,7508629 | 19,8041472 | 23,6290443 | 4,47627559 | 18,2208538 | 9,8529177 | 17,0271677 | 48,7604849 |
| BOYACÁ | 1,61956741 | 1,03564187 | 7,31446145 | 8,65435915 | 1,36560812 | 8,35842919 | 1,1982767 | 0,48464785 | 5,46387928 | 2,89488546 | 6,44708821 |
| CALDAS | 0,21886223 | 0,85964873 | 4,60855451 | 3,47018466 | 2,52626355 | 7,09633336 | 0,88348356 | 7,82755356 | 1,3468945 | 2,09356389 | 8,08845536 |
| CAQUETÁ | 27,1451537 | 7,87257839 | 15,2106421 | 77,7263463 | 14,9474016 | 22,1914795 | 13,1550837 | 16,4550789 | 17,0476978 | 30,6768541 | 41,3398489 |
| CASANARE | 0,33882626 | 0,61142127 | 2,20113878 | 0,85660997 | 3,03829583 | 3,43029099 | 0,05925906 | 2,10022711 | 1,54351525 | 1,8357904 | 11,378319 |
| CAUCA | 36,8496037 | 5,69231388 | 8,52114271 | 16,6507241 | 18,3733268 | 50,6851467 | 20,9430006 | 17,0755409 | 16,7573697 | 15,4275286 | 28,6016042 |
| CESAR | 9,38381457 | 0,93618629 | 14,7721227 | 18,0551181 | 0,87052332 | 12,1901981 | 1,15077473 | 6,03951785 | 25,9167003 | 11,9268878 | 37,0947545 |
| CHOCÓ | 30,7416618 | 7,00674156 | 6,79000928 | 26,9293446 | 29,4197825 | 28,5652064 | 17,0848513 | 12,738461 | 18,3897568 | 16,9491643 | 27,6923574 |
| CÓRDOBA | 3,65600159 | 3,15133391 | 33,8753528 | 1,58569006 | 6,82770661 | 12,7908817 | 11,0210803 | 13,9828841 | 1,8473745 | 12,7108659 | 15,1474748 |
| CUNDINAMARCA | 4,86915542 | 6,76646615 | 1,93399791 | 8,27893992 | 8,11478931 | 21,5919266 | 1,74975002 | 5,11843906 | 7,22031906 | 8,49110796 | 18,6242268 |
| GUAINÍA | 0,55026346 | 0,18520951 | 0,24337495 | 0,14643039 | 3,30963815 | 13,0090214 | 0,17981165 | 2,665737 | 1,01180161 | 6,84015966 | 9,65595294 |
| GUAVIARE | 1,77986742 | 0,5253349 | 6,44183076 | 25,5280853 | 5,0098107 | 19,0153626 | 0,80831394 | 27,9788836 | 3,63249476 | 9,16859474 | 25,0811322 |
| HUILA | 3,17334458 | 0,38573539 | 0,85058255 | 15,0690927 | 7,84177494 | 13,1167953 | 8,07304692 | 1,42554672 | 2,49973047 | 4,75244369 | 3,67336431 |
| LA GUAJIRA | 14,1471106 | 3,07060434 | 5,40094857 | 12,6334854 | 0,66598337 | 27,8828049 | 9,77477011 | 8,86708011 | 41,7017934 | 26,1625881 | 55,4326778 |
| MAGDALENA | 18,2951414 | 55,1146748 | 12,8711005 | 8,72842793 | 1,03749589 | 29,7069971 | 3,28599763 | 7,29276514 | 9,75093064 | 4,02642511 | 17,1475406 |
| META | 39,8816472 | 2,88215875 | 5,85196964 | 17,1459738 | 45,9346798 | 45,1428834 | 15,9015436 | 28,0484343 | 18,2296052 | 24,4043148 | 30,7970868 |
| NARIÑO | 54,4412728 | 13,1864887 | 7,01497423 | 12,4450913 | 20,3859241 | 63,4331775 | 12,2245276 | 36,9535186 | 40,1496681 | 40,4035117 | 71,0696106 |
| NORTE DE SANTANDER | 1,0315814 | 5,62229438 | 16,6081603 | 21,0616393 | 24,66815 | 8,03546964 | 5,52134347 | 10,4825785 | 50,970867 | 63,175566 | 73,7251305 |
| PUTUMAYO | 3,17994946 | 5,26149896 | 4,48925703 | 11,2603517 | 11,041637 | 40,705866 | 11,6078086 | 22,1585213 | 8,03455565 | 29,4400059 | 37,8559646 |
| QUINDÍO | 0,13018353 | 0,41674273 | 2,59938283 | 1,26985903 | 0,30164386 | 3,41678383 | 0,80339493 | 0,15555556 | 0,17152038 | 1,62176494 | 0,16583412 |
| RISARALDA | 6,04925753 | 5,37528165 | 6,12107386 | 0,39171527 | 0,95056823 | 23,811181 | 1,26409576 | 1,47528571 | 4,8746178 | 1,53341644 | 13,1583245 |
| SANTANDER | 2,24145243 | 0,71453042 | 2,54351334 | 3,72078036 | 6,25059964 | 11,3221857 | 3,18534692 | 4,33063386 | 7,08051229 | 12,7818675 | 28,0087647 |
| SUCRE | 7,20637895 | 1,69623883 | 3,6248908 | 2,94661714 | 3,8958897 | 10,2550691 | 2,63825593 | 11,0527939 | 0,37044016 | 2,0532079 | 20,5914455 |
| TOLIMA | 25,1493737 | 1,91696905 | 3,51894427 | 8,8370949 | 9,83169138 | 15,3143787 | 13,2214259 | 5,37443497 | 4,31002769 | 2,31541041 | 3,41522139 |
| VALLE DEL CAUCA | 42,2358763 | 14,0568678 | 15,0489008 | 13,8103902 | 14,950785 | 35,4112166 | 11,0983469 | 8,44483169 | 23,6697505 | 14,8712356 | 57,8193838 |
| VAUPÉS | 1,82769694 | 0,44507951 | 0,0540902 | 0,74718163 | 0 | 13,0251148 | 0,17981165 | 1,1578356 | 0,15980635 | 3,67887977 | 6,13004284 |
| VICHADA | 2,73112972 | 0,30450483 | 0,72757134 | 0,14643039 | 3,69944202 | 16,791079 | 0,04111111 | 11,4175686 | 7,33701362 | 9,67424401 | 1,04154265 |
| (en blanco) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total general | 428,167237 | 174,091139 | 243,494932 | 365,416783 | 328,492393 | 658,550896 | 194,381711 | 321,023152 | 421,037792 | 500,650152 | 863,522425 |

Fuente: Datos tomados del APC-Colombia. Elaboración propia

A.6. Distribución de la población según censo de 2018.

| | Total población | % |
|---|-----------------|--------|
| Total | 44.164.417 | |
| Antioquia | 5.738.672 | 12,99% |
| Atlántico | 2.025.746 | 4,59% |
| Bogotá, D.C. | 5.552.264 | 12,57% |
| Bolívar | 2.019.754 | 4,57% |
| Boyacá | 1.763.851 | 3,99% |
| Caldas | 1.188.246 | 2,69% |
| Caquetá | 416.584 | 0,94% |
| Cauca | 1.371.991 | 3,11% |
| Cesar | 1.051.863 | 2,38% |
| Córdoba | 1.761.427 | 3,99% |
| Cundinamarca | 2.158.842 | 4,89% |
| Chocó | 519.467 | 1,18% |
| Huila | 1.093.515 | 2,48% |
| La Guajira | 763.129 | 1,73% |
| Magdalena | 1.350.468 | 3,06% |
| Meta | 707.787 | 1,60% |
| Nariño | 1.533.301 | 3,47% |
| Norte de Santander | 1.311.288 | 2,97% |
| Quindio | 486.980 | 1,10% |
| Risaralda | 729.550 | 1,65% |
| Santander | 2.146.343 | 4,86% |
| Sucre | 955.612 | 2,16% |
| Tolima | 1.642.655 | 3,72% |
| Valle del Cauca | 3.330.696 | 7,54% |
| Arauca | 188.092 | 0,43% |
| Casanare | 278.295 | 0,63% |
| Putumayo | 235.967 | 0,53% |
| Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 40.958 | 0,09% |
| Amazonas | 67.398 | 0,15% |
| Guainía | 38.624 | 0,09% |
| Guaviare | 58.049 | 0,13% |
| Vaupés | 39.666 | 0,09% |
| Vichada | 67.622 | 0,15% |

| | | |
|--|---------|------------|
| No informa departamento de nacimiento | 31.274 | 0,00070813 |
| Nacieron en otro país | 963.492 | 0,02181602 |
| No informan lugar de nacimiento | 534.949 | 0,01211267 |

Fuente: Datos tomados del DANE. Demografía. Elaboración propia

A.7. Etiqueta de gráficos por Departamento.

| Etiqueta | Nombre del departamento |
|-----------------|--------------------------------|
| AMZ | Amazonas |
| ATQ | Antioquia |
| ARC | Arauca |
| SAI | ARCHIPIELAGO |
| ATN | Atlántico |
| BGO | Bogotá D.C. |
| BLV | Bolívar |
| BOC | Boyacá |
| CAL | Caldas |
| CQT | Caquetá |
| CSN | Casanare |
| CAU | Cauca |
| CES | Cesar |
| CHO | Chocó |
| COR | Córdoba |
| CUN | Cundinamarca |
| GUA | Guainía |
| GVR | Guaviare |
| HUI | Huila |
| LAG | La Guajira |
| MAG | Magdalena |
| MET | Meta |
| NAR | Nariño |
| NST | Norte de Santander |
| PUT | Putumayo |
| QUI | Quindío |
| RSD | Risaralda |
| SAN | Santander |
| SUC | Sucre |
| TOL | Tolima |
| VAL | Valle del Cauca |
| VAU | Vaupés |
| VICH | Vichada |